Caput II De amissione officii ecclesiastici

C. II. De la pérdida del oficio eclesiástico

- 184** § 1. *Amittitur officium ecclesiasticum lapsu temporis praefiniti, expleta aetate iure definita, renuntiatione, translatione, amotione necnon privatione.*
- § 2. *Resoluto quovis modo iure auctoritatis a qua fuit collatum, officium ecclesiasticum non amittitur, nisi aliud iure caveatur.*
- § 3. *Officii amissio, quae effectum sortita est, quam primum omnibus nota fiat, quibus aliquod ius in officii provisionem competit.*

§ 1. *El oficio eclesiástico se pierde por transcurso del tiempo prefijado, por cumplimiento de la edad determinada en el derecho, y por renuncia, traslado, remoción o privación.*

§ 2. *El oficio eclesiástico no se pierde al cesar de cualquier modo el derecho de la autoridad que lo confirió, a no ser que el derecho disponga otra cosa.*

§ 3. *La pérdida de un oficio cuando ha sido efectiva, debe notificarse cuanto antes a todos aquellos a quienes compete algún derecho en la provisión del oficio.*

FUENTES: § 1: c. 183 § 1
§ 2: c. 183 § 2
§ 3: c. 191 § 2

CONEXOS: cc. 143 § 1, 185-196, 538, 975

COMENTARIO

Pablo Gefaell

1. Preliminares

Mientras que el CIC 17 presentaba los cc. de este apartado sin subdivisiones, en el actual código el capítulo sobre la pérdida del oficio se ha estructurado en artículos según las diversas causas de cesación (renuncia, traslado, remoción y privación), manteniendo sin embargo tres cánones fuera del articulado. El c. 184 es el canon general que inicia el cap. II. Los cc. 185-186 sobre la edad y el límite temporal se han colocado también sin subdivisión específica dadas las dificultades encontradas en el *iter* redaccional para encuadrarlos en apartados *a se*, o en uno común a los dos, o en el art. 1 correspondiente a la renuncia (*vide* comentario a los cc. 185 y 186). Estas dificultades se deben a que habitualmente no son causas de

pérdida sino motivos para presentar la renuncia. El CCEO, recogiendo esta experiencia y manteniendo el contenido, ha unido estos tres primeros cánones en uno sólo (c. 965), y ha separado el § 3 del c. 184 CIC constituyéndolo en un segundo canon introductorio: el 966.

2. *Noción de pérdida del oficio*

La pérdida del oficio eclesiástico es el cese de la titularidad y posesión de tal oficio. Corrigiendo la antigua visión personalista de la potestad que hablaba de *ius proprietatis officii*¹, la doctrina más próxima al Concilio Vaticano II ha preferido hablar de «titularidad» en vez de «propiedad»².

Este canon general expone los diversos mecanismos jurídicos por los que se pierden los oficios eclesiásticos (oficio entendido en sentido lato³). Tradicionalmente se distinguía entre *ammissio officii plena*, *amissio officii de iure* y *amissio officii de facto*⁴. La pérdida *plena* del oficio se da cuando se pierde su titularidad jurídica y su posesión de hecho. La mera pérdida *de facto* se produce cuando el titular, conservando su derecho al oficio, pierde su posesión (p.ej., si ha renunciado inválidamente por miedo). La pérdida sólo *de iure* se puede dar si se ha perdido la titularidad pero no se ha abandonado el oficio (p.ej., en muchos casos de pérdida *ipso facto* contemplados en el c. 194). En los supuestos en que la colación canónica se haya formalizado mediante un contrato civil, es conveniente que los mecanismos canónicos de pérdida del oficio se reconozcan también civilmente mediante oportunas cláusulas, para que la pérdida *de iure* se pueda convertir eficazmente en pérdida plena. Esto se deberá cuidar a la hora de confeccionar los estatutos de una persona jurídica reconocida civilmente o a la hora de establecer contratos de trabajo.

En este canon no se pretende prever todos los eventos que producen la vacación del oficio, como ocurre, obviamente, con la muerte del titular⁵. Por el contrario, se hará referencia a la muerte del Obispo cuando se hable de los modos por los que una sede episcopal queda vacante (c. 416). Sin embargo, dado el caso, a la muerte real no se pueden equiparar arbitrariamente los casos análogos de «muerte civil» (p.ej., deportación del Obispo, encarcelación, etc)⁶.

1. Cfr F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, t. II, Romae 1943, p. 387, n. 22.

2. Cfr M. CONTE A CORONATA, *Compendium Iuris Canonici*, vol. I, Taurini-Romae 1950, p. 301, n. 499.

3. Cfr *Comm.* 14 (1982), p. 154.

4. Cfr F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum...*, cit., p. 387, n. 322.

5. Cfr *Comm.* 14 (1982), p. 153, can. 181 ad §1.

6. Cfr F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum...*, cit., p. 388, n. 322 I, nota 10.

Con la pérdida del oficio se pierde también la eventual potestad ordinaria a él aneja (c. 143 § 1). Hay que distinguir, sin embargo, entre *pérdida* del oficio y *suspensión* del mismo: la suspensión consiste tan sólo en impedir (o sea, afectando a la validez de los actos) o en prohibir (afectando sólo a la licitud) el ejercicio de las funciones propias del oficio (cfr, p.ej., cc. 1331 § 1,3º, 1333 § 1).

3. Los modos jurídicos de pérdida del oficio

Los mecanismos de pérdida del oficio se pueden estructurar en tres categorías: *a)* por iniciativa del titular (renuncia); *b)* por determinación objetiva extrínseca (transcurso del tiempo determinado: c.186; cumplimiento de la edad reglamentaria: c. 186; pérdida por causas establecidas en el derecho: cc. 184 § 2 y 194); *c)* por iniciativa de la autoridad (traslado: cc. 190-191; remoción: cc. 192-195; privación: c. 196). Sin embargo, estas causas no son eficaces automáticamente: «anche se la perdita dell'ufficio è basata su un *fatto* giuridicamente rilevante (...) la sua efficacia giuridica dipende normalmente dall'atto dell'autorità che ne prende atto, e non dal solo 'fatto' che, di per sè, è privo di efficacia automatica»⁷. Efectivamente, en el *iter* redaccional de los cánones de este capítulo encontramos intentos de introducir causas de pérdida *ipso facto*, sin necesidad de intervención de la autoridad (*vide* comentario a los cc. 186 y 194), pero en todos estos casos siempre se modificó la inicial propuesta y se estableció la necesidad del acto formal de la autoridad para la efectiva pérdida de oficio.

El nuevo RGCR sigue también esta línea al establecer el cese efectivo de los oficios «soltanto dal momento in cui è comunicata per iscritto dalla competente autorità» (11 § 3; cfr 43 § 7).

«Según los supuestos, el *acto* podrá ser administrativo —notificación o decreto (cfr cc. 48 y ss.), de carácter constitutivo o declarativo (cfr c. 194)— o de naturaleza judicial, mediante sentencia. La *causa* o motivo tendrá distinta entidad —se requerirá causa justa, proporcional, o grave— según los efectos jurídicos que se sigan, y según la postura que adopte el interesado. El *procedimiento* o cauce formal de actuación dependerá también de estos dos últimos factores, y será descrito en los cc. siguientes, y en los cc. 1740-1752»⁸.

Excepciones a la necesidad del acto del superior jerárquico son, en primer lugar, algunos casos de renuncia que no necesitan aceptación (*vide* comentario al c. 189). Otra excepción se da en aquellos oficios vicarios que,

7. J.I. ARRIETA, *Organizzazione ecclesiastica, lezioni di Parte generale (ad usum scholarum)*, Roma 1991-1992, p. 255.

8. J.I. ARRIETA, *Comentario al c. 184*, en *CIC Pamplona*.

al cesar el titular del oficio capital de quien dependen, se pierden efectivamente (*vide* comentario al c. 184 § 2), sin necesidad del acto formal del superior⁹.

4. «*Iter*» y contenido del c. 184

Este canon proviene del c. 183 del CIC 17 al cual se ha añadido el nuevo § 3. En el actual § 1 se ha introducido el cumplimiento de la edad como nueva causa de pérdida del oficio (*vide* comentario al c. 185).

Además de algunos cambios menores —aunque no menos significativos (*collatum* en vez de *concessum*)—, otra modificación respecto al c. 183 § 2 CIC 17 es la supresión de la referencia a la cláusula *ad beneplacitum nostrum* como modo de limitar la duración del oficio. Tanto en el CIC 17 como en el CIC 83, el § 2 afirma que el oficio no se pierde por cese de la autoridad que lo confirió. Pero según la disciplina anterior, si al conferir el oficio se había puesto la predicha cláusula, cesado el derecho del conferente se suponía cesaba también su beneplácito, y por ello se perdía el oficio. La supresión de esta indicación se decidió «quia hodie non bene sonat»¹⁰, pero esto no significa que se prohiba incluir tal cláusula en el acto de colación del oficio: de hecho, el c. 193 § 3 habla de los oficios conferidos «por un tiempo que queda a la prudente discreción de la autoridad». Cabría, pues, preguntarse si en estos casos el cese del conferente produce el cese del conferido: la regla general del § 2 parece indicar claramente que no. Sin embargo existen autores que afirman la pérdida en este caso cuando el oficio fue conferido *ad beneplacitum nostrum*, apoyándose en el c. 81¹¹. Pero apoyar esta afirmación en un canon que se refiere a privilegios no parece coherente —como veremos enseguida— con la actual concepción del oficio eclesiástico.

En efecto, según la teoría de la organización eclesiástica, con la colación del oficio, su titular —si es oficio con potestad (*vide* comentario al c. 145)— obtiene una potestad ordinaria (cfr c. 131) que mantiene hasta la pérdida del oficio (cfr c. 143 § 1), y este oficio no se pierde *resoluto iure auctoritatis a qua fuit collatum* (cfr cc. 183 y 208 CIC 17). Esta estabilidad del oficio y de la potestad a él aneja se explica hoy atendiendo a la visión institucional del oficio como centro estable de competencias jurisdiccionales (*vide* comentario al c. 145). Esta nueva visión alejó la excesiva vinculación de la potestad ordinaria a la persona física. Dicha vinculación exigía

9. Cfr *Ibidem*.

10. *Comm.* 21 (1989), p. 227.

11. V. DE PAOLIS-A. MONTAN, *Normae Generali*, en VV.AA., *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, vol. I, Roma 1988, p. 423; L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico, commento giuridico-pastorale*, vol. I, Napoli 1988, p. 243, n. 1085.

explicar la permanencia de la potestad en el titular del oficio una vez cesada la autoridad concedente recurriendo a la equiparación de la potestad ordinaria al privilegio *praeter ius* y la colación del oficio a una donación¹². Así se entiende que en este canon los comentadores del CIC 17 hiciesen referencia al c. 73, que trataba sobre la no cesación de tales privilegios *resoluto iure concedentis*¹³. Equiparación que, además, se encuadraba dentro del planteamiento de la potestad como una gracia en beneficio del titular; visión ya superada al considerar la potestad como servicio. Por tanto, apoyarse hoy en los privilegios para explicar la estabilidad del oficio ya no parece aceptable.

Sin embargo, del principio general del c. 184 § 2, se deben exceptuar los casos en los que el derecho —sea universal o particular— establezca la pérdida de oficio en tal circunstancia. Así, como ya se ha dicho, los oficios vicarios se pierden cuando el correspondiente oficio capital queda vacante. En realidad no existe un canon que establezca una norma general de este tenor, aunque ésta sea la doctrina tradicional deducida de la naturaleza representativa y sustitutiva de estos oficios y que se refleja en la normativa concreta referente al cese de los oficios vicarios (Vicario general y episcopal: c. 481). Sin embargo, dado el gran número de casos en los que el oficio vicario no cesa —Legado pontificio, Vicarios judiciales, y otros¹⁴—, y teniendo en cuenta la dificultad para establecer cuáles son los oficios vicarios —salvo los oficios del Romano Pontífice y del Obispo diocesano, el resto parecen tener todos naturaleza vicaria—, y dado que el concepto de vicariedad también ha cambiado —pues se le reconoce plena responsabilidad orgánica (*vide* cc. 1734 y ss.)—, visto todo esto, sería mejor no considerar los oficios vicarios como excepción al principio general de no cesación y limitarse a decir —como hace el canon— que, en sí mismo, ninguno cesa, aunque el derecho puede establecer el cese en algunos casos.

El cese del Administrador diocesano con la toma de posesión del nuevo Obispo (c. 430) es, sin embargo, un modo de pérdida del oficio no bien encuadrado en los previstos en este capítulo. Parece, por ello, que habría que considerar otro tipo de pérdida del oficio: la del oficio transitorio, que se pierde con la toma de posesión del titular estable.

Hemos dicho anteriormente que el § 3 del presente canon es una novedad del actual CIC; sin embargo, como bien han hecho notar algunos

12. Cfr B. OJETTI, *Commentarium in Codicem iuris canonici*, t. IV, Roma 1931, p. 117.

13. Cfr M. CABREROS, *Comentario al can. 183*, en VV.AA., *Código de Derecho Canónico, y legislación complementaria (texto latino y versión castellana, con jurisprudencia y comentarios)*, Madrid 1957.

14. Cc. 367, 1420 § 5. Cfr RGCR, art. 44.

autores¹⁵, se trata de una generalización de lo ya establecido para el caso de renuncia en el c. 191 § 2 CIC 17; esto se decidió en los primerísimos pasos de la revisión del Código¹⁶. En el c.184 § 3, aunque no se diga expresamente, se entiende que quien debe notificar la vacación del oficio a los que tengan derecho sobre su provisión no es la persona que pierde el oficio, sino que es la misma autoridad de la que ha emanado el acto por el cual se hace efectiva dicha pérdida (aceptación de la renuncia, decreto de traslado, etc). Si bien hasta el CIC 17 existía la obligación de *publicar* la pérdida del beneficio (por renuncia), esto se consideró abrogado con la normativa pío-benedictina¹⁷, y de este modo quedó sólo la obligación de notificarla a los legítimamente interesados.

La falta de notificación oficial a los interesados —según algunos autores— no condiciona la validez de los actos, si a aquellos les consta con certeza la vacación del oficio de modo que puedan ejercer sus derechos¹⁸.

P. Gefaell

15. Cfr R.A. HILL, *Comentario al c. 184*, en CORIDEN-GREEN-HEINTSCHEL (Eds.), *The Code of Canon Law, a text and commentary*, Londres 1985.

16. Cfr *Comm.* 21 (1989), p. 229.

17. F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum...*, cit., p. 396, n. 330.

18. J. MANZANARES, *Comentario al c. 184*, en *CIC Salamanca*; L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico...*, cit., p. 243, n. 1086.

185 **Ei, qui ob impletam aetatem aut renuntiationem acceptatam officium amittit, titulus emeriti conferri potest.**

Puede conferirse el título de «emérito» a aquel que ha cesado en un oficio por haber cumplido la edad o por renuncia aceptada.

FUENTES: No constan

CONEXOS: cc. 184 § 1, 186-189, 402 § 1, 443 § 2, c. 707 § 1, 1242

COMENTARIO

Pablo Gefaell

La pérdida del oficio por cumplimiento de la edad determinada es una novedad en el CIC, aunque en la mayoría de los casos la fijación de una edad límite establece más propiamente una causa para la renuncia o una causa legítima para la remoción, si no se renuncia (*vide* comentario a los cc. 184 y 186).

Para entender el origen de la regulación del c. 185 sobre el «emérito» hay que tener presente el *iter* del c. 184 en lo referente a la edad. En 1969 se había introducido esta nueva causa con el nombre de *emeritatus* («quando aetatis gratia quis ab officio cessat»¹⁹), que se colocaba dentro del canon precursor del c. 184 § 1, diciendo que el oficio se pierde «expletione aetatis qua quis ad normam iuris fit emeritus» y se creó, simultáneamente, un nuevo apartado —«1. *De emeritatu (vel de emeritis)*»— en el que se encontraba un único canon: el precedente del c. 186²⁰. Pero en 1980, finalmente, se decidió no hablar del emeritado en el canon general sobre los modos de pérdida del oficio (c. 184), indicando simplemente en éste la pérdida por cumplimiento de la edad. Se suprimió, a la vez, el apartado *De emeritatu*. La Comisión decidió esta precisión porque el emeritado no es un modo de pérdida del oficio, sino un título honorífico concedido discrecionalmente por la autoridad a los ex-titulares de ciertos oficios, y no *ipso iure* para cualquier tipo de oficio como preveía el proyecto. Se debía, pues, hablar de la *edad* como causa de la pérdida del oficio, no ya del *emeritado*, ya que éste adviene después de la cesación del oficio. Por estas razones se introdujo también entonces el precedente del c. 185 que da la posibilidad de conceder

¹⁹. *Comm.* 21 (1989), p. 227.

²⁰. Cfr *ibidem*, pp. 227-228 y 242.

el título de emérito a los que cesan en el oficio ya no sólo por edad sino también por renuncia²¹.

Parece lógico que la autoridad competente para otorgar el título de emérito sea aquella que lo es para la provisión del mismo oficio²².

El único caso en el que el derecho común concede *ipso iure* el título de emérito es el del Obispo diocesano que renuncia (c. 402 § 1; cfr. c. 443 § 2). En 1988 la CpE dió unas normas sobre los Obispos que cesan en su oficio, en las que se indica que el título de *emérito* también se concederá automáticamente a los que cesaron en su oficio en la Curia romana, en las Legaciones pontificias o en otros cargos «expleto mandato, revocatione, vel renuntiatione»²³. En estos casos, por tanto, el título de emérito no sólo se concede si se ha perdido el oficio por renuncia aceptada, sino también por revocación o por cumplimiento del mandato.

El título de emérito o dimisionario, como hemos dicho, es meramente honorífico, y —por derecho común— no confiere atribución jurídica alguna sobre el oficio, aunque el derecho particular lo podría conceder. El mismo Código establece la posibilidad de que se conceda a los Obispos eméritos voto deliberativo en el concilio particular (c. 443 § 2)²⁴. Además, las normas de la CpE arriba mencionadas disponen algunas nuevas posibilidades funcionales para los Obispos eméritos²⁵.

Habría que preguntarse dónde encuadrar el caso de los Obispos diocesanos que dejan la Sede viva para dedicarse a otros oficios que no tienen aneja una *portio Populi Dei* (oficios en la Curia romana, Secretario de la Conferencia Episcopal, etc.). Formalmente *renuncian* al oficio diocesano, y por ello obtienen el título de Obispo emérito de esa Sede, pero sustancialmente se trata de un *traslado* de oficio, y por tanto se podría incluir también este caso entre los arriba dichos.

Si el Obispo diocesano emérito era religioso puede seguir viviendo fuera de la casa religiosa (c. 707). El Obispo diocesano emérito puede ser enterrado en su propia iglesia (c. 1242).

21. Cfr *Comm.* 23 (1991), p. 263.

22. Cfr V. DE PAOLIS-A. MONTAN, *Normae Generali*, en VV.AA., *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, vol. I, Roma 1988, p. 423.

23. CpE, *Normae de episcopis ab officio cessantibus*, 31.X.1988, en *Comm.* 20 (1988), pp. 167-168.

24. Cfr, p.ej., CONFERENZA EPISCOPALE POLACCA, *Regolamento del II Sinodo Plenario, 17 ottobre 1991*, en «*Ius Ecclesiae*» 5 (1993), pp. 403-404, n. III.1.

25. *Vide* comentario al c. 402 §1, donde también se cita la respuesta del PCITL del 10.X.1991, AAS 23 (1991), p. 1.

Sobre el título de emérito aplicado a otros oficios, se pueden encontrar también algunas disposiciones de derecho particular. Así, en España, «todo beneficiado legítimamente jubilado puede ostentar el título del último beneficio poseído con calificación de ‘dimisionario’ o ‘emérito’»²⁶.

P. Gefaell

²⁶. CEe, *Documentación complementaria al decreto general del 26.XI.1983*, art. 14, 1.A.3c.

186 **Lapsu temporis praefiniti vel adimpleta aetate, amissio officii effectum habet tantum a momento, quo a competenti auctoritate scripto intimatur.**

La pérdida de un oficio por transcurso del tiempo prefijado o por cumplimiento de la edad sólo produce efecto a partir del momento en que la autoridad competente lo notifica por escrito.

FUENTES: No constan

CONEXOS: cc. 184 § 1, 185, 354, 401 § 1, 538 § 3, 184 § 1, 193 §§ 1 y 2, 477 § 1, 481 § 1, 492 § 2, 494 § 2, 522, 538 § 1, 554 § 2, 501 § 1, 513 § 1, 624, 1422, 1751 § 2

COMENTARIO

Pablo Gefaell

Se trata en este canon de la pérdida del oficio por término temporal y por edad. Estos dos hechos no causan *per se* la pérdida del oficio (*vide* comentario al c. 184), sino que constituyen únicamente motivos que la autoridad competente tendrá en cuenta para hacer efectiva o no la pérdida del oficio mediante notificación escrita al titular. Si ésta no llega, se supone la prórroga tácita del oficio, y éste no se pierde, manteniéndose *pleno iure* su ejercicio²⁷.

A este respecto, es interesante el *iter* del presente canon. El CIC 17 recogía el «lapsu temporis praefiniti» únicamente dentro del canon general sobre la pérdida de los oficios (c. 183), sin aclarar si la pérdida se producía automáticamente o se necesitaba intimación de la autoridad para su efectiva pérdida. En 1969 los consultores de la Comisión propusieron que la pérdida fuera «*ipso facto elapsi temporis, potius quam intimationi ab auctoritate faciendae post exactum tempus. Est res minus odiosa*»²⁸. Se quería, así, evitar a la autoridad el molesto deber de la notificación²⁹. Sin embargo, respecto a la cesación por edad, la normativa propuesta exigía la intimación escrita para la

²⁷. Cfr P.V. PINTO, *Comentario al c. 186*, en VV.AA., *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di P.V. Pinto, Roma 1985.

²⁸. *Comm.* 21 (1989), p. 250.

²⁹. *Ibidem*, p. 270, c. 2.

efectiva pérdida³⁰. Los dos cánones eran entonces los únicos del ahora desaparecido apartado «De Lapsu temporis». En la sucesiva fusión de estos dos cánones desapareció la pérdida *ipso facto*, sin que se encuentren razones que lo expliquen³¹, pues el nuevo canon exige la intimación escrita para la efectiva pérdida por ambas causas³². El c. 186 adquiriría así su texto definitivo. Podemos decir que se ha rechazado expresamente la inicial propuesta de la pérdida *ipso facto*, y para explicarlo se podría recurrir a la razón que el Secretario de la Comisión entonces apuntaba para la edad: «cessatio ab officio non venit expletione aetatis sed per auctoritatis actum»³³.

1. Pérdida por edad

En el Código no se menciona ninguna cesación por cumplimiento de la edad. Los términos que el derecho común indica para los Cardenales jefes de dicasterios de la Curia (c. 354), para los Obispos diocesanos (c. 401 § 1), para los Obispos coadjutores y auxiliares (c. 411) y para los párrocos (c. 538 § 3), no son propiamente límites de edad fijados para la pérdida del oficio sino edades en las que se recomienda la presentación de la renuncia³⁴. Por esta razón incluso se llegó a proponer encuadrar los cánones sobre la edad dentro del apartado de la renuncia³⁵. Si eventualmente no se quisiera renunciar, la autoridad competente podría basarse ya en causa legítima para su remoción, previo paternal esfuerzo para persuadirle a la renuncia³⁶ (esto no valdría para el caso de límite de edad del Obispo diocesano: *vide* comentario al c. 192).

En el derecho particular encontramos también ejemplos de edades fijadas para poder pedir la cesación o para poder imponerla si no se renuncia espontáneamente. Así, en España, «a partir de los sesenta y cinco años cumplidos todo sacerdote puede solicitar la jubilación dentro del sistema de la Seguridad Social del clero. (...) El Obispo puede imponer dicha jubilación a los sacerdotes que hayan cumplido

30. Cfr *ibid.*, p. 270, c. 3.

31. Cfr *Comm.* 22 (1990), pp. 96 y 114.

32. *Comm.* 23 (1991), p. 263.

33. *Ibidem.*

34. Cfr, p.ej., CD, 21 y 31; y ES, 11 y 20 § 3.

35. Cfr *Comm.* 23 (1991), p. 263.

36. Cfr c. 1742 § 1. Cfr también CIV, Respuesta de 7.VII.1978, en AAS 70 (1978), p. 534.

los setenta años de edad, sin exceptuar ningún oficio eclesiástico...». Sin embargo, la Santa Sede ha pedido que esta legislación particular se adecúe en lo posible a la norma codicial³⁷.

Hemos visto que los límites de edad establecidos en el Código son meras recomendaciones a la renuncia. Sin embargo, existen otros límites de edad fijados por el derecho que no se reducen a una mera recomendación de presentar la renuncia, sino que se encuadran propiamente como causas de la pérdida del oficio. Así, por ejemplo, el RGCR, al definir las edades límite para la cesación del servicio, distingue entre lo dispuesto para los Cardenales («compiuti il settantacinquesimo anno di età sono pregati di presentare le dimissioni»), y lo dispuesto para el resto de los titulares de oficios curiales («compiuto il ... anno di età, cessano...»): a los 75 años los Arzobispos Presidentes y los Secretarios y equiparados; a los 80 años los miembros de los diversos organismos; a los 74 años los Jueces de la Rota Romana; a los 70 años los Subsecretarios y equiparados; igualmente los Oficiales si son sacerdotes o religiosos; a los 65 años los Oficiales si son laicos³⁸.

Los oficios eclesiásticos generalmente se confieren por un tiempo, determinado o indeterminado (cfr c. 193 §§ 1 y 2). Son una excepción los oficios vitalicios.

2. Pérdida por transcurso del tiempo

a) Oficios conferidos a tiempo determinado

En el derecho común: *a)* los oficios de Vicario general y Vicario episcopal pueden tener duración determinada (c. 481), y, si el Vicario episcopal no es Obispo auxiliar, la duración del mandato debe determinarse (c. 477 § 1); *b)* los miembros del consejo de asuntos económicos de la diócesis se nombran para un periodo de cinco años, y su nombramiento es renovable (c. 492 § 2); *c)* el ecónomo diocesano se ha de nombrar para un periodo de cinco años renovables (c. 494 § 2); *d)* los miembros no *ex officio* del consejo presbiteral se nombran para un tiempo determinado en los estatutos (c. 501 § 1); *e)* los

³⁷. CEe, *Decreto general sobre algunas cuestiones especiales en materia económica*, 1.XII.1984, art. 3. Confirmado *ad quinquenium* por la SCE el 8.VI.1985, y renovado por tres años el 6.V.1993 (cfr. *Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española*, X (1993), p. 152). (Vide comentario al c. 538).

³⁸. RGCR, 43.

miembros del colegio de consultores se nombran para cinco años, prorrogables hasta la constitución del nuevo colegio (c. 502 § 1); *f*) el consejo pastoral se constituye para un tiempo determinado (c. 513 § 1); *g*) el arcipreste debe nombrarse para un tiempo determinado por el derecho particular (c. 554 § 2); *h*) en principio, los Superiores de los institutos religiosos deben nombrarse para un tiempo determinado (c. 624 § 1); *i*) el Vicario judicial, los adjuntos y los demás jueces de la diócesis deben nombrarse para un tiempo determinado (c. 1422).

En el derecho particular: *a*) el nombramiento del párroco puede ser para tiempo determinado sólo si está así admitido por decreto de la Conferencia Episcopal (c. 522)³⁹; *b*) se nombran para un quinquenio: los Prefectos, Presidentes, Miembros, Prelados Superiores, Subsecretarios y equiparados, y los Consultores de los Dicasterios de la Curia romana (RGCR, 11 § 2).

Según el canon que comentamos, para producirse la pérdida del oficio no basta el transcurso del tiempo sino que es necesaria la emisión de un decreto de intimación por parte de la autoridad al titular del oficio. Algunos autores —apoyándose en el c. 10— mantienen que la intimación oral sería válida, aunque ilícita⁴⁰, pero nos parece que el c. 186 no sólo exige expresamente la intimación, sino también el modo de hacerla.

Se pueden plantear problemas si, una vez transcurrido el tiempo del mandato, la autoridad competente es negligente en intimar por escrito la cesación. Está claro que, mientras no lo haga, se conserva la titularidad, pero ¿conserva la autoridad indefinidamente el derecho de intimar la cesación? Parece que sí, aunque es una situación de inestabilidad en el oficio que se debería evitar (*vide* comentario al c. 522), pues siendo oficios conferidos por un tiempo determinado, se convertirían en oficios *ad nutum auctoritatis* (cfr c. 193). Quizás se podría aducir el silencio administrativo positivo y presumir la confirmación en el oficio por otro periodo de tiempo si la autoridad no intima la cesación en un plazo establecido por el derecho, pero esto parece forzar bastante el sentido del c. 57, que al tratar del silencio administrativo negativo, presupone decisión negativa después de tres

³⁹. Cfr, p. ej., CEe, *Primer Decreto General*, art. 4, en BCEe III (1984), p. 98; CEI, *delibera n.5*, en «Notiziario CEI», 23.XII.1983, p. 206; ID, *delibera n. 17* en «Notiziario CEI», 6.IX.1984, p. 204. *Vide* comentario al c. 522.

⁴⁰. Cfr V. V. DE PAOLIS-A. MONTAN, *Normae Generali*, en VV.AA., *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, vol. I, Roma 1988, p. 423.

meses de silencio: habría que presumir que con el silencio se niega la cesación, y ésto parece un poco forzado en este caso. (En el caso de la renuncia al oficio, sin embargo, se aplica claramente el silencio administrativo: *vide* c. 189 § 3 y comentario).

b) *Oficios conferidos por tiempo indeterminado:*

En el derecho común: a) el Vicario general puede ser nombrado por tiempo indefinido, e igualmente el Vicario episcopal si es Obispo auxiliar (c. 477 § 1); b) el párroco debe ser nombrado por tiempo indefinido, salva la excepción citada arriba (c. 522), pero, como vimos, se recomienda su renuncia a los 75 años (c. 538 § 3).

En el derecho peculiar de la Curia romana los Oficiales de la Curia se incluyen a tiempo indefinido dentro de la *Tabella organica* y de aquí se nombran para uno u otro organismo de la Curia, teniendo sólo el ya mencionado límite de edad⁴¹.

P. Gefaell

⁴¹. RGCR, 6, 12 y 43.

Art. 1 De renuntiatione*A. 1. De la renuncia***187** **Quisquis sui compos potest officio ecclesiastico iusta de causa renuntiare.**

El que se halla en su sano juicio puede, con causa justa, renunciar a un oficio eclesiástico.

FUENTES: c. 184

CONEXOS: cc. 184, 185, 188-189, 332 § 2, 354, 367, 401, 402, 411, 416, 430 § 2, 481 § 1, 538, 1742, 1743

COMENTARIO

Pablo Gefaell

El c. 187 afirma el derecho a la renuncia del oficio. Renuncia, en sentido propio, es la libre cesión, dimisión o abdicación —aunque antiguamente se daban diversos matices a estos términos⁴²— del oficio eclesiástico, por justa causa, en manos de la legítima autoridad, a quien compete generalmente aceptarla o rechazarla.

1. *El derecho a renunciar*

La presentación de la renuncia, tratándose de un acto jurídico, debe cumplir los requisitos previstos por los cc. 124 y ss. para la validez de tales actos. El c. 187 indica ya uno de los requisitos: el gozar de sano juicio («quisquis sui compos potest...»). Este requisito del c. 187 resume la «persona hábil» del c. 124, puesto que, en nuestro caso, sólo el titular del oficio puede considerarse capaz para su renuncia, y esa persona será hábil con tal de estar en su sano juicio, ya que —como veremos en seguida— en la normativa actual no pueden

42. Cfr F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, t. II, Romae 1943, p. 389, n. 324.

existir otras circunstancias subjetivas que influyan en la carencia de legitimación jurídica para realizar el acto de la renuncia.

En efecto, el presente canon proviene del c. 184 CIC 17, pero, en relación a éste, presenta una notable diferencia: el antiguo texto legal admitía la posibilidad de prohibir la renuncia («nisi speciale prohibitione renunciatio sit ipsi interdicta»). Esta cláusula fue discutida desde el principio de los trabajos de revisión y, aunque no se suprimió inmediatamente⁴³, en 1974 se optó por omitirla⁴⁴.

La decisión de suprimir esta frase indica claramente que se quería suprimir cualquier clase de medidas que prohibiesen el derecho de renuncia⁴⁵, tanto las del derecho común (cfr, p. ej., cc. 568 y 1485 CIC 17) como aquellas puestas por el derecho particular o en el mismo acto de conferir el oficio.

2. *La causa justa para renunciar*

El derecho a la renuncia, sin embargo, contempla sólo la facultad de *presentar* la renuncia, pues no se trata de un derecho a desentenderse arbitrariamente de una carga, que tiene carácter de servicio eclesial y se ha aceptado libremente. Por esto el canon especifica que ha de haber «causa justa» para renunciar, que es exigida para su aceptación o, al menos, para la licitud de ésta (*vide* comentario al c. 189).

En *Corpus Iuris Canonici* se apuntaban las causas justas por las que el Obispo podía renunciar: «debilis, ignarus, male conscius, irregularis, quem mala plebs odit, dans scandala, cedere possit» (XI, 9, 10). Es decir: podía renunciar quien tuviera conciencia de crimen, de irregularidad, de ser odiado por el pueblo, o de dar escándalo, con las debidas matizaciones para cada caso⁴⁶. Estas causas se aplicaban *a fortiori* a los demás oficios inferiores, si bien en la Curia romana se admitían también otras causas más leves⁴⁷. Sin embargo, hasta el CIC 17, para los demás oficios las causas justas para la renuncia estaban

43. Cfr *Comm.* 21 (1989), p. 228.

44. Cfr *Comm.* 23 (1991), pp. 67 y 104.

45. Cfr, p. ej., F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, cit., pp. 392-392, n. 325-326; B. OJETTI, *Commentarium in Codicem iuris canonici*, t. IV, Roma 1931, pp. 120-121.

46. Cfr B. OJETTI, *Commentarium in Codicem iuris canonici*, t. IV, Roma 1931, pp. 119-120.

47. Cfr F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, cit., p. 394, n. 327 III.

taxativamente establecidas⁴⁸. A partir del CIC 17 se considera que se puede renunciar por cualquier motivo, que de por sí no necesariamente ha de ser grave, pero sí proporcional a la importancia del oficio y a los daños que puede causar la renuncia⁴⁹.

Como dijimos, este derecho de renuncia se refiere sólo al acto de presentarla, ya que, en general, la presentación de la renuncia no basta para la pérdida efectiva del oficio. Para ésto se exigen, ante todo, los requisitos de idoneidad para la validez del acto jurídico de renuncia (cc. 188, 189 §1) y, en la mayoría de los casos se requiere, además, su aceptación por parte de la autoridad competente (*vide* c. 189 § 2).

3. *La renuncia tácita*

En el código pío-benedictino se distinguían dos tipos de renuncia: la «expresa» y la «tácita» (c. 188). Esta última ha desaparecido —al menos nominalmente— del CIC vigente. La renuncia tácita era «la contenida en ciertos hechos puestos voluntariamente por el titular del oficio, en virtud de los cuales la ley presume, con presunción *iuris et de iure*, la intención de renunciar y acepta la renuncia»⁵⁰. Durante los trabajos de revisión se decidió cambiar la conceptualización de estos supuestos, y considerarlos no ya «renuncia» sino «remoción *ipso iure*»⁵¹, dando origen al actual c. 194 (*vide* su comentario).

Nos parece que la solución adoptada en el anterior cuerpo legislativo era más conveniente, ya que hay ciertos comportamientos que, en verdad, presuponen simplemente la renuncia y parece menos adecuado considerarlos como un cuasi-delito que merezca la remoción. De hecho, en el RGCR, que es posterior al CIC 83, todavía se prevé la pérdida del oficio por medio de un sistema similar a la renuncia tácita («rinuncia dichiarata d'ufficio»: RGCR, 63), pues es un mecanismo menos drástico que la remoción *ipso iure*.

4. *La renuncia condicionada*

⁴⁸. Cfr *ibidem*; y también W.H.W. FANNING, voz «Renuntiation» en VV.AA., *The Catholic Encyclopedia*, vol. XII, Londres 1911, p. 774.

⁴⁹. Cfr M. CABREROS, *Comentario al c. 184*, en VV.AA., *Código de Derecho Canónico, y legislación complementaria (texto latino y versión castellana, con jurisprudencia y comentarios)*, Madrid 1957; R.A. HILL, *Comentario al c. 187*, en CORIDEN-GREEN-HEINTSCHEL (Eds.), *The Code of Canon Law, a text and commentary*, Londres 1985.

⁵⁰. M. CABREROS, *Comentario al c. 187*, en VV.AA., *Código...*, cit.

⁵¹. Cfr *Comm.* 21 (1989), p. 229.

Desde antiguo la renuncia expresa podía presentarse bajo condición⁵². En el derecho precodicial, con la típica unión oficio-beneficio, se podía renunciar al mismo en favor de una tercera persona o reservándose la pensión o reservándose el derecho de regreso, acceso o ingreso, o para permutar por otro beneficio⁵³. En el CIC 17 se limitó bastante la posibilidad de condicionar la renuncia⁵⁴. Una decisión del STSA, de 1970, afirmaba que la posibilidad de la renuncia condicionada ya no existía, porque «Sumus Pontifex abrogavit canonem 2150 § 3 (m.p. Ecclesiae Sanctae, n. 20 §1)»⁵⁵; sin embargo, el texto del m.p. citado por la decisión realmente no se refiere a las renunciaciones condicionadas, sino a la remoción libre. De hecho, el actual Código, reflejando precisamente el c. 2150 § 3 CIC 17, permite la renuncia condicionada en el caso del párroco que es invitado a renunciar antes de ser removido (c. 1743). Luego —ya que no existe otro canon que lo prohíba— se ha de suponer que el CIC admite, en general, la posibilidad de poner condiciones a la renuncia. Claro está que, en este caso, su eficacia depende de la aceptación de la autoridad y, siguiendo el sentido tradicional, se deben entender no aceptables por la autoridad inferior las condiciones que afecten a la provisión del oficio; y la condición eventualmente puesta, será siempre en devolutivo, no en suspensivo⁵⁶.

En el CIC 17 la «permuta» de oficios o beneficios se regulaba en los cc. 1487-1489, limitando mucho la normativa precedente⁵⁷. La permuta de oficios no era propiamente un contrato bilateral entre los titulares de los oficios permutantes, sino una libre renuncia mutua de estos oficios en manos de la autoridad competente con una condición añadida por los titulares para que a cada uno se le confiriese el oficio renunciado por el otro⁵⁸. De este modo, se veía también como un

⁵². Cfr M. CONTE A CORONATA, *Compendium Iuris Canonici*, vol. I, Taurini-Romae 1950, p. 303, n. 505, 2º; W.H.W. FANNING, voz «Abdication», en VV.AA., *The Catholic Encyclopedia*, vol. I, Londres 1907, p. 31; M. CABREROS, *Comentario al c. 184*, en VV.AA., *Código...*, cit.; F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, cit., p. 390, n. 324.

⁵³. P. ej., VI III, 10, cap. único; cfr. también, W.H.W. FANNING, voz «Renuntiation» en VV.AA., *The Catholic Encyclopedia*, vol. XII, Londres 1911, p. 774.

⁵⁴. Cfr cc. 1486, 2150 § 3 CIC 17; también PCI, Respuesta 20.V.1923, en AAS 16 (1923), p. 116 (pensión vitalicia como posible condición legítima para la renuncia).

⁵⁵. Decisión del STSA de 9.VI.1970, en X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. IV; Roma 1974, n. 3867, col. 5840.

⁵⁶. Cfr F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, cit., p. 395, n. 328, I.

⁵⁷. Cfr *Ibidem*, p. 339-408, nn. 333-347.

⁵⁸. Cfr *Ibid.*, p. 403, n. 337.

recíproco traslado hecho por el Obispo previa condición puesta por los trasladados, y —si se trataba de derecho de patronato— con el consentimiento del patrono⁵⁹. No se consideraba propiamente renuncia en favor de otro⁶⁰, porque la condición puesta por el renunciante se dirigía a obtener el otro oficio, no a que el titular del otro oficio tomase el suyo. La permuta de oficios-beneficios que se encontraban en diversas diócesis debía hacerse con el consentimiento de los respectivos Ordinarios locales⁶¹.

La permuta de los oficios-beneficios no se recoge en el Código, puesto que el sistema benefical ha sido abolido (c. 1272). Pero al existir la posibilidad de poner condiciones a la renuncia se abre la eventualidad de una condición en este sentido.

5. *Casos concretos de renunciias*

Del Romano Pontífice: c. 332 § 2. De los Cardenales en la Curia: c. 354. Del Legado pontificio: c. 367. Del Obispo diocesano: c. 416. Del Obispo coadjutor o auxiliar: c. 411. Del administrador diocesano: c. 430 § 2. Del Vicario general o episcopal: c. 481 § 1. Del párroco: cc.538, 1742 § 1 y 1743. En la Curia romana: RGCR, 45 § 3 y 61-64.

P. Gefaell

⁵⁹. Cfr c. 1487 CIC 17.

⁶⁰. Cfr c. 1486 CIC 17.

⁶¹. Cfr F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, cit., p. 404, n. 339.

188 **Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo vel errore substantiali aut simoniace facta, ipso iure irrita est.**

Es nula en virtud del derecho mismo la renuncia hecha por miedo grave injustamente provocado, dolo, error substancial o simonía.

FUENTES: c. 185

CONEXOS: cc. 124-126, 184 §1, 185, 187, 189

COMENTARIO

Pablo Gefaell

La presentación de la renuncia debe cumplir los requisitos previstos por los cc. 124 y ss. para la validez de los actos jurídicos.

El c. 188 recoge cuatro circunstancias que hacen inválido del acto de renuncia por afectar a la libertad de la persona. Como sucede con los negocios jurídicos más importantes (matrimonio: cc. 1098 y 1103; emisión de votos: c. 1191 § 3, etc.), en estos supuestos el miedo grave e injusto y el dolo no son meras causas de rescindibilidad del acto (c. 125 § 2), sino auténticas causas de nulidad de éste. Así, el c. 188 es una excepción al c. 125, el cual ya prevé estas excepciones («nisi aliud iure caveatur»). Con esta disposición se busca proteger al titular del oficio para que no sea injustamente empujado a la renuncia. Por tanto, «para la validez de la renuncia se requiere más de lo que el derecho exige para la validez del acto jurídico en general»⁶².

Lógicamente, estas causas de nulidad del acto deben cumplir los requisitos que el derecho y la doctrina establecen.

1. El *miedo* ha de ser subjetivamente grave, provocado por la amenaza externa y humana de un mal serio e injusto que sólo se puede evitar —al menos a juicio del paciente— renunciando al oficio. Si la amenaza es justa (p.ej., amenazar la remoción por causa justa) el miedo no vicia la renuncia⁶³, cosa que no sucede en el caso del matrimonio, en el cual todo miedo provocado es injusto (*vide*

⁶². J. MANZANARES, *Comentario al c. 188*, en *CIC Salamanca*.

⁶³. Cfr, al respecto, la decisión de la SCConc de 24.IV.1880, ASS 13, p. 501 y ss.

comentario al c. 1103). Se podría discutir si es necesario que el miedo sea inferido *para* obtener la renuncia⁶⁴ o basta —como en el caso del matrimonio— que se provoque por una amenaza externa que no busque obtener la renuncia, pero la provoque.

2. El *error substancial*, al cual se equipara la ignorancia substancial, es un juicio equivocado sobre los elementos esenciales de la renuncia, esto es: *a*) error sobre la causa o motivo de la renuncia (p. ej., se renuncia porque se juzga erróneamente que existe incompatibilidad de oficios); *b*) error —o ignorancia— sobre la misma naturaleza de la renuncia y sus consecuencias⁶⁵. También será inválida la renuncia si existe error o ignorancia sobre una condición *sine qua non* (c. 126), o sea, que la condición estipulada entre renunciante y autoridad sea conocida erróneamente por el renunciante.

3. El *dolo* es el engaño provocado para causar la renuncia. El engaño puede versar sobre las causas de la renuncia (p.ej., engañar al titular convenciéndole de haber dañado gravemente a alguien con el ejercicio de su oficio), o sobre sus efectos o sobre falsas futuras posibilidades⁶⁶. Así, el error doloso sobre la posibilidad de alcanzar un bien futuro, mayor pero incompatible con el oficio desempeñado, entraría también en este supuesto. No concordamos con Chiappetta⁶⁷, quien admite sólo el dolo que provoque error substancial. Si se ha incluido el dolo como causa de invalidez y no de simple rescindibilidad es porque se busca proteger al renunciante de cualquier dolo suficientemente grave (a la manera del dolo en el matrimonio). Si se admitiera estrictamente sólo el dolo que provoca error substancial no haría falta incluirlo como causa *a se*.

4. La *simonía*, así como invalida la provisión del oficio (c. 149 § 3), también hace inválida la renuncia. La simonía, en nuestro caso, consiste en la intención deliberada de comprar o vender por un precio temporal (no espiritual) la renuncia a un oficio eclesiástico (cfr c. 727 § 1 CIC 17). Se debe entender la compraventa en sentido lato, o sea,

⁶⁴. Cfr R.A. HILL, *Comentario al c. 188*, en CORIDEN-GREEN-HEINTSCHEL (Eds.), *The Code of Canon Law, a text and commentary*, Londres 1985.

⁶⁵. Cfr, p.ej., decisión del STSA de 9.VI.1970, en X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. IV; Roma 1974, n. 3867, col. 5840.

⁶⁶. Cfr *VII*, 7, 2.

⁶⁷. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico, commento giuridico-pastorale*, vol. I, Napoli 1988, p. 246, n. 1097 y nota 1.

cualquier pacto, sea expreso o tácito, llevado a efecto o no (c. 728 CIC 17). La doctrina incluía otros supuestos (simonía *interna*, simonía *externa mental*) en los que no mediaba pacto y no se tipificaban como delito⁶⁸; pensamos que estos supuestos tampoco deben considerarse en nuestro canon. Para evitar las renunciaciones simoníacas el CIC 17 limitó mucho las renunciaciones en favor de terceros⁶⁹.

El c. 188 reproduce casi exactamente el c. 185 CIC 17. La única objeción que se le ha puesto durante los trabajos codificadores consistió en que en el nuevo CIC no se define la noción de «simonía», y por tanto el canon podría quedar poco claro y faltar certeza jurídica al usar este término. Coherentemente con la decisión de evitar en lo posible las definiciones en el Código, a esta dificultad se respondió que «notio sufficienter definitur a doctrina et iurisprudentia»⁷⁰.

Lógicamente estos supuestos de nulidad del acto de renuncia tendrán su importancia práctica a la hora de promover un recurso jerárquico o una causa administrativa contra la renuncia viciada por tales supuestos.

P. Gefaell

⁶⁸. Cfr M. CABREROS, *Comentario al c. 727*, en VV.AA., *Código de Derecho Canónico, y legislación complementaria (texto latino y versión castellana, con jurisprudencia y comentarios)*, Madrid 1957.

⁶⁹. Cfr F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, t. II, Romae 1943, p. 395, n. 328.

⁷⁰. *Comm.* 14 (1982), p. 153.

- 189** § 1. *Renuntiatio, ut valeat, sive acceptatione eget sive non, auctoritati fieri debet cui provisio ad officium de quo agitur pertinet, et quidem scripto vel oretenus coram duobus testibus.*
- § 2. *Auctoritas renuntiationem iusta et proportionata causa non innixam ne acceptet.*
- § 3. *Renuntiatio quae acceptatione indiget, nisi intra tres menses acceptetur, omni vi caret; quae acceptatione non indiget effectum sortitur communicatione renuntiantis ad normam iuris facta.*
- § 4. *Renuntiatio, quamdiu effectum sortita non fuerit, a renuntiante revocari potest; effectu secuto revocari nequit, sed qui renuntiavit, officium alio ex titulo consequi potest.*

§ 1. Para que valga la renuncia, requiérase o no su aceptación, ha de presentarse, por escrito o de palabra ante dos testigos, a la autoridad a quien corresponde conferir el oficio de que se trate.

§ 2. La autoridad no debe aceptar la renuncia que no esté fundada en una causa justa y proporcionada.

§ 3. No produce efecto alguno la renuncia que necesita aceptación, si no es aceptada en el plazo de tres meses; la que no necesita aceptación produce su efecto mediante la notificación del renunciante, hecha según norma del derecho.

§ 4. Mientras la renuncia no haya producido efecto, puede ser revocada por el renunciante; una vez que lo ha producido, no puede revocarse, pero quien renunció puede conseguir el oficio por otro título.

FUENTES: § 1: cc. 186, 187

§ 2: c. 189 § 1

§ 3: c. 189 § 2; CI Resp. III/1, 14 iul. 1922 (AAS 14 [1922] 526-527)

§ 4: c. 191 § 1; CI Resp. III/2, 14 iul. 1922 (AAS 14 [1922] 526-527)

CONEXOS: cc. 57, 184, 185, 187, 188, 332 § 2, 402, 416, 430 § 2, 538 § 3, 1743

COMENTARIO

Pablo Gefaell

Este largo canon proviene de la fusión de los cc. 186, 187, 189 y 191 § 1 del CIC 17, reorganizándolos, simplificándolos e introduciendo algunos cambios.

1. *Los requisitos formales del acto de renuncia (§ 1)*

El § 1 recoge los requisitos formales de la presentación de la renuncia, tan necesarios para la validez de la renuncia como los requisitos sustanciales de los cc. 187-188.

El c. 186 CIC 17 se incluyó tardíamente (en 1980) como inciso en el nuevo § 1, permitiendo la renuncia *por escrito u oralmente* ante la autoridad competente y dos testigos, pero suprimiendo la referencia a la renuncia por procurador⁷¹. Aunque algunos autores consideran posible aún la renuncia por procurador⁷². El escrito de renuncia deberá indicar: la persona que renuncia, el oficio que se cede, la causa que se alega, súplica a la autoridad para que la admita, firma del interesado y fecha⁷³; para mayor seguridad podría ser también legalizado ante notario y depositado en el archivo de la curia⁷⁴. La forma escrita u oral ante la autoridad competente y dos testigos es requisito necesario para la validez de la renuncia, no sólo para la licitud⁷⁵.

Respecto a la *autoridad competente* para recibir la renuncia, el c. 187 CIC 17 forma el cuerpo principal del § 1 del nuevo canon, pero se ha simplificado notablemente, estableciendo que la renuncia —«requiérase o no su aceptación»— puede ser presentada sólo ante la autoridad a quien corresponde conferir el oficio a un nuevo titular. Antiguamente, la normativa se complicaba al existir diversas autoridades competentes para conferir el oficio y para recibir la renuncia de éste⁷⁶; y, existiendo el derecho de patronato, también existía una norma que prohibía y castigaba la renuncia en manos de los seglares⁷⁷.

2. La causa justa para aceptar la renuncia (§ 2)

El c. 189 § 1 del CIC 17 establecía que la autoridad necesitaba una causa justa y proporcionada para —en su caso— aceptar la renuncia.

⁷¹. Cfr *Comm.* 23 (1991), p. 264.

⁷². L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico, commento giuridico-pastorale*, vol. I, Napoli 1988, p. 247, n. 1103.

⁷³. Cfr A. ALONSO LOBO, *Oficios eclesiásticos*, en VV.AA., *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, t. I, Madrid 1963, p. 483, n. 477.

⁷⁴. *Ibidem*; cfr c. 186 CIC 17.

⁷⁵. L. CHIAPPETTA, *Il Codice...*, cit., p. 246, n. 1102.

⁷⁶. Cfr F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, t. II, Romae 1943, pp. 396-398, n. 331; A. ALONSO LOBO, *Oficios eclesiásticos*, cit., p. 483, nota 36.

⁷⁷. C. 2400 CIC 17; cfr., también, B. OJETTI, *Commentarium in Codicem iuris canonici*, t. IV, Roma 1931, pp. 125-126.

Durante los trabajos de revisión se quiso aclarar que la causa justa para aceptar la renuncia no es diversa de la causa justa para presentarla: la autoridad sólo debe investigar y juzgar si el renunciante se basa verdaderamente en una causa justa y proporcionada. No son, pues, dos causas sino dos juicios diversos —el del renunciante y el de la autoridad— sobre la misma causa⁷⁸. Ya vimos las causas justas para la renuncia (*vide* comentario al c. 187), ahora se trata de que estas causas «convenzan» a la autoridad, la cual para ponderar la proporcionalidad de la causa presentada puede valerse de otros datos que son el otro término de la proporción. Deberá, pues, tener en cuenta las exigencias del servicio⁷⁹, la existencia de posibles sustitutos, la congrua sustentación del clérigo⁸⁰, el estar en curso un proceso disciplinario sobre el interesado (cfr RGCR, 61), etc.

3. *El término para responder a la renuncia* (§ 3)

El CIC 17 (en el c. 189 § 2, precedente del actual c. 189 § 3) exigía al Ordinario del lugar una respuesta, afirmativa o negativa, dentro del mes de la presentación de la renuncia. El texto legal era poco preciso pues exigía respuesta —al menos según la letra del canon— también para las renunciaciones que no necesitaban aceptación. Sin embargo, el c. 189 § 3 del CIC 83 fija el plazo de tres meses para dar respuesta a la renuncia que necesita aceptación, y si no se da respuesta dentro de este término la renuncia «*omni vi caret*», siendo aplicación directa del «silencio administrativo negativo» que en estos supuestos implica el rechazo de la petición (c. 57).

Vimos que, en caso de que alguien hubiera presentado la renuncia y pasara el plazo de respuesta inútilmente, ésta se debe considerar rechazada, pero ¿podría la autoridad aceptarla posteriormente sin necesidad de que se repita la presentación de la renuncia?: si seguimos la respuesta de la PCI de 14.VII.1922⁸¹, parecería que sí⁸². Pensamos, sin embargo, que esta interpretación, al hacer referencia al Código abrogado, no puede ser tomada en cuenta, y que el texto del nuevo c. 189 § 3 al decir «*renuntiatio... omni vi caret*» está anulando cualquier

⁷⁸. Cfr *Comm.* 21 (1989), p. 228.

⁷⁹. Cfr, p.ej., RGCR, 61.

⁸⁰. Cfr cc. 568 y 1484 CIC 17.

⁸¹. AAS 14 (1922), p. 526.

⁸². Cfr M. CABREROS, *Comentario al c. 189*, en VV. AA., *Código...*, cit.

posible efecto jurídico del acto inicial de presentación de la renuncia si ésta no se ha aceptado dentro del término legal.

La praxis (usada en algunos ámbitos civiles) de firmar la renuncia sin fecha definida, dejando a la autoridad la posibilidad de concretarla a su arbitrio, no parece muy correcta, puesto que puede ser un mecanismo de coacción sobre el titular y daña la estabilidad del oficio. Sin embargo, pensamos que el Código no prohíbe nada al respecto⁸³.

La aceptación es el acto de la autoridad que hace efectiva la pérdida del oficio (*vide* comentario al c. 184). La mera presentación de la renuncia es en sí misma ineficaz. Este principio general admite la excepción de las renunciaciones constitutivas, que no necesitan aceptación (c. 189 § 3). En estos casos, la renuncia es efectiva cuando el renunciante la notifica a la autoridad competente según norma del derecho, o sea, cumpliendo los requisitos sustanciales y formales (cc. 187-189). Tal disposición no estaba recogida —como norma general— en el CIC 17, quizás debido a su poca frecuencia práctica en el derecho común (en el particular, en cambio, se pueden dar muchos casos), ya que en el Código tan sólo existen dos supuestos de renuncia que no necesitan aceptación: la renuncia del Romano Pontífice (c. 332 § 2)⁸⁴ y la renuncia del Administrador diocesano (c. 430 § 2).

4. *La revocación de la renuncia* (§ 4)

Este nuevo párrafo contradice la disposición contenida en el c. 191 § 1 del CIC 17, que afirmaba la imposibilidad de retractarse una vez hecha legítimamente la renuncia⁸⁵. En el canon mencionado, con la expresión «legitime facta renuntiatione», no se dejaba claro si la imposibilidad de retirar la renuncia se daba una vez «presentada» o una vez «hecha efectiva». Recurriendo al claro sentido que tenía esta expresión en el canon anterior (190 § 1 CIC 17) parecía que la irrevocabilidad se daba una vez presentada, pero desde antiguo la doctrina había aceptado que «ante acceptationem a Superiore factam, resignans suum actum unilateralem potest revocare, cum res adhuc sit

⁸³. Para la opinión contraria, cfr. p. ej., R.A. HILL, *Comentario al c. 189*, en CORIDEN-GREEN-HEINTSCHEL (Eds.), *The Code of Canon Law, a text and commentary*, Londres 1985

⁸⁴. Cfr *VII*, 7, 1.

⁸⁵. Cfr F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, cit., p. 398, n. 331. Cfr, también, la decisión del STSA de 11.VI.1972, en X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. IV, Roma 1974, n. 4072.

integra»⁸⁶. Esto originó una respuesta auténtica⁸⁷ que aclaraba la duda, estableciendo que se podía revocar la renuncia si todavía no había sido aceptada. El texto actualmente vigente recoge esta interpretación auténtica y la extiende también a las renunciaciones que no necesitan aceptación, pues aclara que el renunciante puede revocar su renuncia con tal de que ésta todavía no haya producido efecto (por no haber sido todavía aceptada o por otras causas).

El c. 190 CIC 17 señalaba que el oficio quedaba vacante una vez notificada la aceptación al renunciante, y que el renunciante debía permanecer en su oficio hasta recibir noticia cierta de la aceptación. Estas disposiciones no se recogen expresamente en el precepto paralelo del CIC 83, pero esto no significa que no continúen en vigor. Manzanares piensa que la notificación de la aceptación ya no es necesaria para la validez porque «las cláusulas irritantes no se pueden suponer, sino que se deben probar (c. 10)», y por eso se inclina «por la no necesidad para la validez, aun cuando el respeto a las personas y la misma seguridad jurídica parecerían exigirlo»⁸⁸. Pero, a nuestro entender, la exigencia perentoria de esta notificación ya se recoge en el apartado sobre los actos administrativos singulares (c. 47), de tal modo que el acto administrativo inicial de provisión del oficio no puede considerarse revocado hasta que se notifique legítimamente tal revocación (que puede ser mediante la notificación de la aceptación de la renuncia o mediante la notificación del decreto de remoción, etc.) y, por tanto, hasta entonces no se produce la vacación.

Por otro lado, hoy es innecesario indicar la obligación de continuar en el oficio hasta recibir noticia cierta de la aceptación de la renuncia, dados los nuevos requisitos de esta notificación. Efectivamente, según la nueva normativa, para producir la vacación del oficio no basta la «noticia cierta» de la aceptación sino que es necesaria la «legítima notificación» (c. 47), que además de cierta ha de ser formal u oficial, resolviendo así una cuestión ya planteada respecto al texto del antiguo canon⁸⁹. De este modo, aunque se haya recibido noticia informal de la aceptación, si todavía no ha sido comunicada oficialmente, ésta puede

⁸⁶. F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, cit., p. 398, n. 331; cfr. B. OJETTI, *Commentarium...*, cit., p. 133-134.

⁸⁷. CPI, RESPUESTA de 14.VII.1922: AAS 14 (1922), p. 526.

⁸⁸. J. MANZANARES, *Comentario al c. 189*, en *CIC Salamanca*.

⁸⁹. Cfr M. CABREROS, *Comentario al c. 190*, en *VV. AA., Código...*, cit; A. ALONSO LOBO, *Oficios eclesiásticos*, cit., pp. 484-485.

ser retirada y la renuncia rechazada. Pudiera parecer, sin embargo, que tanto en el CIC 17 (c. 430 § 1) como en el Código actual (cc. 416-417) la vacación del oficio de Obispo diocesano por renuncia se da cuando se recibe simplemente «noticia cierta» de la aceptación del Romano Pontífice: pero afirmar esto no sería exacto, puesto que, teniendo en cuenta que el c. 47 no contiene cláusulas que permitan excepciones, se debe deducir que en este caso también se exige la notificación oficial.

A pesar de haber sido suprimida del Código, por las razones arriba apuntadas, el Reglamento de la Curia romana todavía advierte a los renunciantes la obligación de continuar desarrollando los deberes del oficio hasta que no se le comunique la aceptación de la renuncia (RGCR, 62).

P. Gefaell

Art. 2 De translatione*A. 2. Del traslado*

190 § 1. *Translatio ab eo tantum fieri potest, qui ius habet providendi officio quod amittitur et simul officio quod committitur.*

§ 2. *Si translatio fiat invito officii titulari, gravis requiritur causa et, firmo semper iure rationes contrarias exponendi, servetur modus procedendi iure praescriptus.*

§ 3. *Translatio, ut effectum sortiatur, scripto intimanda est.*

§ 1. El traslado sólo puede hacerlo quien tiene derecho a conferir tanto el oficio que se pierde como el que se encomienda.

§ 2. Si el traslado se hace contra la voluntad del titular del oficio, se requiere causa grave y, quedando en pie el derecho a exponer las razones contrarias, debe observarse el procedimiento establecido por el derecho.

§ 3. Para que el traslado produzca efecto, ha de intimarse por escrito.

FUENTES: § 1: c. 193 § 1
§ 2: c. 193 § 2

CONEXOS: cc. 184 § 1, 362, 416-418, 437 § 3, 624 § 3, 1336 § 1, 4º, 1748-1752

COMENTARIO

*Pablo Gefaell***I. Concepto de traslado**

El traslado consiste en el cambio del titular de un oficio hacia otro oficio diverso, impuesto o permitido por la competente autoridad debido a causas legítimas. Se incluye en el apartado de la pérdida de los oficios porque supone la pérdida del oficio precedente, aunque también implica simultáneamente —al menos en el orden lógico— la provisión del otro.

II. Sujeto pasivo

Fuera del Romano Pontífice, todos los titulares de oficios eclesiásticos son susceptibles de traslado, pues la figura del oficio inamovible ha sido suprimida (CD, 31; *vide* comentario al c. 193 § 1), aunque haya oficios que gozen de mayor estabilidad que otros (cfr. cc. 193 §1 y 522).

En el § 2 de este canon se suprimió la palabra «clérigo» porque lo establecido en estos cánones debía servir también para los laicos⁹⁰, aunque, como se puede observar en alguna legislación, en el caso de los clérigos y de los religiosos el legislador supone una mayor disponibilidad que en los laicos (cfr RGCR, 45 § 1).

El traslado no sólo lleva consigo pérdida del oficio *a quo*, sino también una provisión canónica del oficio *ad quod*. Por tanto, es lógico que el sujeto pasivo del traslado deba cumplir las condiciones de idoneidad del nuevo oficio.

III. *Autoridad competente*

Como el traslado supone la remoción de un oficio y la provisión de otro, el § 1 establece que sólo puede realizar el traslado aquella autoridad que es competente para proveer los dos oficios implicados. Esta clara disposición ya estaba recogida en el c. 193 § 1 CIC 17, pero importantes comentaristas de ese cuerpo legal —aun dejando firme este principio— no dudaban en incluir en la categoría de «traslado» el caso en el que una persona dejaba un oficio en una diócesis para recibir otro en otra diócesis, requiriendo, en este supuesto, el consentimiento de ambos Ordinarios interesados⁹¹. Sin embargo, nos parece que el claro sentido del c. 190 § 1 indica que el traslado sólo puede darse entre órganos del mismo ente (p. ej., la diócesis), y que si se trata de oficios pertenecientes a diferentes entes eclesiásticos no se puede hablar de «traslado» sino sólo de pérdida del oficio precedente e, independientemente, recepción del nuevo⁹². A pesar de todo, en ciertos textos legales todavía se nota cierta confusión terminológica en este sentido: en el RGCR, 45 § 2, por ejemplo, se dice que la Sede Apostólica puede disponer el traslado de un sacerdote que ocupa un oficio en la Curia romana hacia otro servicio en su diócesis de

⁹⁰. Cfr *Comm.* 21 (1989), p. 229.

⁹¹. Cfr F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, t. II, Romae 1943, p. 416, n. 355, II.

⁹². Cfr R.A. HILL, *Comentario al c. 190*, en CORIDEN-GREEN-HEINTSCHEL (Eds.), *The Code of Canon Law, a text and commentary*, Londres 1985

procedencia, e incluso parece entenderse que esto se puede realizar sin el consentimiento del Obispo diocesano, pues el texto exige sólo «ponerse en contacto» con él. Estaría más claro si se dijera que la Santa Sede puede «remover» en estos casos, pero al decir «trasladar» se está indicando la concesión de otro oficio en la diócesis, provisión que está fuera de la competencia de la Santa Sede. En definitiva, no se podría hacer este presunto traslado sin lesionar el principio de descentralización de los entes eclesiásticos y el carácter propio, no vicario, de la potestad del Obispo diocesano.

Quienes eligieron, postularon o presentaron al actual titular del oficio, no por ello tienen potestad para trasladarlo a otro oficio. Esta indicación del c. 195 del CIC 17 ha desaparecido del CIC 83, pues ya no era necesaria, teniendo en cuenta el principio general establecido por el actual c. 190 § 1.

IV. *Tipos de traslado, causas y modos de proceder*

Los tipos de traslado se distinguen por las causas que lo justifican y por el modo de proceder al traslado. Como estos factores están intrínsecamente relacionados, los expondremos juntos. En líneas generales el traslado puede ser voluntario o forzoso.

1. *El traslado voluntario*

Este traslado, que es aceptado libremente o incluso pedido, se equipara —al menos en cuanto a la pérdida del anterior oficio— a la renuncia condicionada⁹³, y por tanto se podrá realizar por cualquier causa justa⁹⁴ e incluso sin ninguna causa aparente⁹⁵, pues las voluntades concordes de la autoridad y del afectado parecen suficientes para su validez. Efectivamente, es norma de prudencia en el gobierno que se ascienda gradualmente a oficios eclesiásticos de mayor importancia a quien ha demostrado su idoneidad en los oficios inferiores. Esto es lo que se llama «promoción», aunque también puede darse un traslado a oficio de igual categoría o incluso de categoría inferior, pero este último difícilmente será voluntario.

⁹³. Cfr M. CONTE A CORONATA, *Compendium Iuris Canonici*, vol. I, Taurini-Roma 1950, p. 309, n. 521. (*Vide* comentario al c. 187).

⁹⁴. Cfr B. OJETTI, *Commentarium in Codicem iuris canonici*, t. IV, Roma 1931, p. 147.

⁹⁵. Cfr F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonikum*, cit., p. 417, n. 356. Cfr también *Comm.* 23 (1991), p. 265.

En el proceso redaccional del canon, la mención del traslado voluntario se suprimió porque no se consideraba necesaria, era algo obvio⁹⁶.

El modo de proceder en estos traslados voluntarios no exige ninguna forma peculiar. Basta observar los requisitos para la renuncia del oficio *a quo* y las normas generales para la provisión del oficio *ad quod*⁹⁷, así como las normas de derecho particular, si las hubiera. Es decir: a la hora de conceder el oficio *ad quod*, no se pueden descuidar o pasar por alto los derechos de aquellos a los que compete —por derecho común o particular— la colación, elección, presentación o postulación del titular para ese oficio. Y esto vale también a la hora de los traslados forzosos.

2. *El traslado forzoso*

Es el impuesto por la autoridad contra la voluntad del interesado. Este traslado coactivo no siempre tiene estricto carácter penal, ni siempre ha de equipararse a la remoción, como se decía en el c. 193 § 2 del CIC 17⁹⁸ (allí se hablaba de «privatio», pero en ese texto significaba «remoción» en sentido genérico: *vide* comentario al c. 192).

A la hora de distinguir los tipos de traslado forzoso, sin embargo, será útil seguir los tipos de remoción, al menos en cuanto a sus causas y procedimientos. Durante los trabajos de revisión de este canon se discutió si era necesario especificar en el texto los diversos modos de proceder para cada tipo de traslado y se decidió hacer sólo una mención general, remitiéndose a lo exigido por el derecho para el modo de proceder en cada caso⁹⁹.

El traslado coactivo puede ser *penal* o *administrativo*. Según el canon, en cualquiera de los casos ha de imponerse sólo por causa grave.

a) *El traslado penal* es impuesto por un delito: su causa, pues, ha de ser una acción tipificada como delictiva. En el c. 1336 se prevé el traslado forzoso como posible pena expiatoria, pero en el derecho

⁹⁶ Cfr *Comm.* 23 (1991), p. 264.

⁹⁷ Cfr M. CONTE A CORONATA, *Compendium...*, cit., p. 310, n. 525.

⁹⁸ Cfr *Comm.* 23 (1991), p. 265.

⁹⁹ Cfr *ibidem*.

común no existe ningún delito que exija esta pena. Por consiguiente se trata únicamente de una de las posibilidades ofrecidas al Superior para los delitos que prevén pena indeterminada («iusta poena puniatur») o para suavizar la pena de privación del oficio si a juicio del Superior concurre alguna circunstancia atenuante¹⁰⁰.

El modo de proceder para la imposición de un traslado penal será el previsto por el derecho penal. Por tanto este tipo de traslado podrá ser actuado mediante proceso judicial o mediante decreto extrajudicial (c. 1342 § 2), aunque nunca podrá ser pena *latae sententiae* (c. 1336 § 2) y, en el caso en que pudiera darse un traslado «perpetuo», no podría ser impuesto mediante decreto extrajudicial (c. 1342 § 2).

b) *El traslado administrativo* se impone por causas «graves», que han de entenderse como causas «proporcionadas» al traslado que se quiere imponer¹⁰¹: la gravedad de la causa deberá ser mayor o menor según el tipo de oficio o las circunstancias. Si se trata, por ejemplo, del traslado del titular de un oficio conferido a tiempo indefinido, que goza *a iure* de especial estabilidad (c. 193 § 2), la causa deberá ser más grave que si se trata de un oficio conferido para un tiempo determinado o dejado a la prudente discreción del Obispo¹⁰². Estando al tenor del canon, es un tanto sorprendente que el motivo del traslado forzoso de los oficios conferidos para un tiempo dejado «ad prudentem discretionem auctoritatis» deba ser grave y no pueda ser tan sólo cualquier «causa justa», como, en cambio, se señala para la remoción de estos oficios (*vide* comentario al c. 193). Pensamos que la aclaración que hace la Comisión revisora, referente a la interpretación de la «causa grave» como causa proporcional al tipo de traslado, puede reducir esta diferencia y equiparar la «causa proporcionalmente grave» a la simple «causa justa». De manera análoga, si el traslado es hacia un oficio más desventajoso —por las razones que sean— para el titular, la causa deberá ser más grave que si se trata de un oficio similar y con las mismas circunstancias de lugar, horario, etc.

El modo de proceder dependerá también del tipo de traslado administrativo y de sus causas. Así, la autoridad que va a proceder al traslado deberá previamente cerciorarse del grado de estabilidad del

¹⁰⁰ Cfr A. ALONSO LOBO, *Oficios eclesiásticos*, en VV.AA., *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, t. I, Madrid 1963, p. 488, n. 486.

¹⁰¹ Cfr *Comm.* 23 (1991), p. 264.

¹⁰² Cfr R.R. CALVO-N.J. KINGLER (Eds.), *Clergy Procedural Handbook*, Washington 1992, p. 118.

oficio que ocupa el que va a ser trasladado¹⁰³. Para poder imponer el traslado a los titulares de los oficios más estables —como el parroquial— normalmente se exigirá un especial procedimiento administrativo (cc. 1748-1752)¹⁰⁴: éstos son los llamados estrictamente «traslados administrativos». El traslado forzoso pero no penal de los oficios que gozan de menor estabilidad (cfr, p. ej., RGCR, 22) se suele llamar «simple» y puede hacerse sin procedimiento especial, siguiendo sencillamente las prescripciones generales del derecho y la equidad natural. Este último requisito sobre la equidad —que proviene de lo exigido en el CIC 17 para la remoción «simple»— no se quiso recoger en este apartado del Código porque es un principio general que ha de tenerse siempre en cuenta¹⁰⁵, sin embargo, aparece de nuevo en el último canon del Código en relación a los traslados (c. 1752).

Para el traslado de párrocos, como hemos dicho, hay normas especiales (cc. 1748-1752); también existen disposiciones peculiares para los Legados pontificios, aunque esta vez debido a su especial movilidad (c. 362); el traslado de los Superiores religiosos se rige por su derecho peculiar (c. 624 § 3); el traslado de los Obispos diocesanos es tratado específicamente en los cc. 416-418, y, aunque el Romano Pontífice podría decretar el traslado forzoso de un Obispo diocesano, es antigua la praxis de contar habitualmente con su consentimiento¹⁰⁶.

V. *Derecho a oponerse al traslado*

El canon, como dijimos, menciona el modo de proceder solamente en modo general, pero durante los trabajos redaccionales se quiso reafirmar expresamente que el que va a ser trasladado goza del derecho de exponer sus razones contrarias al traslado¹⁰⁷. Además, una vez decretado el traslado, el Código reconoce el derecho a interponer recurso en suspensivo (cc. 1734 § 1, 1736 § 1, 1747 § 3, 1752) —no sólo en devolutivo, como decía el CIC 17— contra el acto administrativo que impone el traslado (cc. 1732-1739). Y si se trata de un traslado penal impuesto mediante sentencia, la apelación suspende

¹⁰³. Sobre la estabilidad del oficio, *vide* comentario a los cc. 193 y 522.

¹⁰⁴. Cfr R.R. CALVO-N.J. KINGLER (Eds.), *Clergy...*, cit., p. 118

¹⁰⁵. Cfr *Comm.* 14 (1982), p. 153, c. 189.

¹⁰⁶. Cfr F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, cit., p. 418, n. 358; B. OJETTI, *Commentarium...*, cit., p. 149.

¹⁰⁷. Cfr *Comm.* 23 (1991), p. 265.

la ejecución de la sentencia (c. 1353) y también queda suspendida la potestad del oficio *a quo* (por analogía con el c. 143).

Teniendo presente esta normativa, resulta extraño que el RGCR reconozca únicamente el derecho a *exponer* las razones contrarias al traslado antes de que sea decidido, y se niegue el derecho a *oponerse* a éste una vez decretado (RGCR, 23 y 45 § 2)¹⁰⁸. Esta disposición parece hacer inútil en este caso todo el citado apartado del Código sobre los recursos jerárquicos y las normas contenidas en el mismo RGCR sobre los recursos (arts. 118-122). Esto se podría justificar considerando que, siendo los oficios de la Curia romana dependientes del más alto nivel jerárquico, no cabe recurso jerárquico, sino que únicamente es posible la vía del contencioso-administrativo ante la Signatura Apostólica (cfr RGCR, 120 § 4). De todos modos, no parece muy acertado el texto del RGCR a este respecto, pues el derecho a oponerse al traslado siempre existe, aunque sea sólo en el nivel judicial, y tampoco se debe olvidar que existe la posibilidad del recurso ante el «Ufficio del Lavoro della Sede Apostólica» (RGCR, 120 § 5).

VI. *La intimación por escrito*

El § 3 del c. 190 es nuevo en relación al respectivo canon del CIC 17.

Se exige, para la eficacia del traslado, que se intime por escrito, sea con la simple notificación escrita sea con el envío de copia del decreto de traslado. Así, la mera noticia oral del traslado decidido no tiene fuerza jurídica alguna. El c. 418, sin embargo, hablando del traslado del Obispo diocesano, parece reconocer eficacia a la simple «noticia cierta» del traslado, pero si acudimos al c. 382 § 2, veremos que los términos usados en el c. 418 deberían hacer referencia a la recepción de las «letras apostólicas», y no a la simple noticia oral. El CCEO es más explícito en este punto: en efecto, en su c. 223 — paralelo al 418 del CIC— no utiliza la expresión «certa notitia», como hace el CIC, sino «intimatio», que es técnicamente más exacta y sirve para clarificar el sentido de la expresión usada en el CIC.

P. Gefaell

¹⁰⁸. Cfr J.I. ARRIETA, *Funzione pubblica e attività di governo nell'organizzazione centrale della Chiesa: Il Regolamento Generale della Curia romana*, en «Ius Ecclesiae» 4 (1992), pp. 597-598.

191 § 1. *In translatione, prius officium vacat per possessionem alterius officii canonice habitam, nisi aliud iure cautum aut a competenti auctoritate praescriptum fuerit.*

§ 2. *Remunerationem cum priore officio conexam translatus percipit, donec alterius possessionem canonice obtinuerit.*

§ 1. *En caso de traslado, el primer oficio queda vacante con la toma de posesión canónica del segundo, a no ser que otra cosa disponga el derecho o prescriba la autoridad competente.*

§ 2. *El trasladado percibe la remuneración correspondiente al primer oficio, hasta que toma posesión canónica del segundo.*

FUENTES: § 1: c. 194 § 1

§ 2: c. 194 § 2

CONEXOS: cc. 380, 382, 404, 418, 527 §§ 2 y 3, 534 § 1, 542,3°

COMENTARIO

Pablo Gefaell

1. «Iter» del canon

Este canon proviene del c. 194 del CIC 17. Las únicas diferencias notables respecto al anterior texto se refieren a la extensión a los laicos¹⁰⁹ y la eliminación de la terminología propia del sistema benefical¹¹⁰.

2. Causa de la pérdida efectiva del oficio precedente

Según las reglas generales sobre la provisión de oficios, en el traslado la provisión plena del nuevo oficio se da con su toma de posesión, y este hecho perfecciona la pérdida del oficio precedente, provocando su vacación de derecho. Pero esta norma general puede tener dos excepciones: *a)* que el derecho —común o particular— disponga otra cosa; *b)* que la autoridad competente prescriba otra cosa. Veamos estos dos supuestos.

a) En el derecho común, el c. 418, por ejemplo, establece que el Obispo diocesano, durante el intervalo entre la notificación de su traslado y la toma de posesión de su nueva diócesis, ya no goza de todos sus derechos de Obispo diocesano en la precedente diócesis. Como se puede ver, esto es, en cierta manera, una excepción a la regla general del c. 191 que establece la vacación a partir de la toma de posesión del nuevo oficio. Hemos dicho que

¹⁰⁹. Cfr *Comm.* 21 (1989), p. 230.

¹¹⁰. Cfr *Comm.* 21 (1989), p. 250; 22 (1990), p. 115.

se trata de una excepción «en cierta manera», porque hoy este supuesto no se considera propiamente de una «vacación», sino una limitación de las competencias del Obispo que se dispone a dejar su diócesis por la nueva. A este respecto, el CIC 17 daba un matiz diferente en su c. 430 § 2, diciendo que la diócesis *a quo* quedaba vacante «plenamente» con la toma de posesión de la nueva; luego en el intervalo se daba vacación, aunque no plena¹¹¹. Esto posiblemente proviene del antiguo *stylus Curiae romanae* que preveía la pérdida del oficio *a quo* no el día de la toma de posesión del nuevo sino el mismo día de la promoción en Consistorio¹¹².

En el derecho propio de la Curia romana se puede encontrar también un ejemplo de excepción al principio del c. 191 § 1. El RGCR, 60 establece la figura del «collocamento in disponibilità»: es ésta una situación peculiar que supone una cierta pérdida del oficio —en realidad queda en suspenso— que puede terminar en traslado o en remoción.

b) «La cláusula ‘a no ser que otra cosa... prescriba la autoridad competente’ quiere evitar las dificultades que podrían derivarse del c. 153 § 1, sobre todo cuando se hacen simultáneamente varios traslados»¹¹³. La autoridad también puede, por ejemplo, establecer que el trasladado —ya en posesión del nuevo oficio— permanezca en el oficio anterior hasta que se encuentre un sustituto. A nuestro juicio, la autoridad competente para prescribir un momento diverso de vacación del anterior oficio es la misma autoridad que puede disponer el traslado.

En el caso de que el trasladado se niegue a tomar posesión del nuevo oficio, transcurrido el tiempo fijado en el decreto de traslado o el establecido posteriormente para la toma de posesión, la autoridad podría declarar vacante el primer oficio, siguiendo, por analogía, el criterio del c. 1751 § 2¹¹⁴.

3. La remuneración durante el periodo de traslado

El § 2 del canon recoge la misma norma del c. 194 § 2 CIC 17. Las dificultades interpretativas del viejo texto surgían del sistema oficio-beneficio entonces imperante. Con el nuevo sistema de remuneración de los titulares de oficios eclesiásticos se ha simplificado notablemente la

¹¹¹. Cfr M. CABREROS, *Comentario al can. 194*, en VV.AA., *Código de Derecho Canónico, y legislación complementaria (texto latino y versión castellana, con jurisprudencia y comentarios)*, Madrid 1957.

¹¹². Cfr M. CONTE A CORONATA, *Compendium Iuris Canonici*, vol. I, Taurini-Roma 1950, p. 310, n. 526, nota 7; B. OJETTI, *Commentarium in Codicem iuris canonici*, t. IV, Roma 1931, p. 150-151, nota 4.

¹¹³. J. MANZANARES, *Comentario al c. 191*, en *CIC Salamanca*.

¹¹⁴. Cfr J.I. ARRIETA, *Organizzazione ecclesiastica, lezioni di Parte generale (ad usum scholarum)*, Roma 1991-1992, p. 259.

regla de derecho: se recibe la remuneración del oficio *a quo* hasta que se tome posesión del nuevo.

Normas directamente derivadas de este párrafo son el c. 418 § 2 (sobre el Obispo diocesano trasladado) y el RGCR, 60 § 2, que dispone que «durante il periodo della disponibilità è corrisposta l'intera retribuzione».

P. Gefaell

Art. 3 De amotione*A. 3. De la remoción*

192 **Ab officio quis amovetur sive decreto ab auctoritate competenti legitime edito, servatis quidem iuribus forte ex contractu quaesitis, sive ipso iure ad normam can. 194.**

Uno queda removido de un oficio, tanto por un legítimo decreto dado por la autoridad competente, sin perjuicio de los derechos que pudieron adquirirse por contrato, como por el derecho mismo conforme a la norma del c. 194.

FUENTES: c. 192 § 1

CONEXOS: cc. 193, 194, 682 § 2

COMENTARIO

Pablo Gefaell

La remoción es la pérdida forzosa del oficio eclesiástico, en la cual no se exige necesariamente la colación de un nuevo oficio al removido¹¹⁵. Se establece por decreto de la autoridad competente o por el mismo derecho en los casos taxativamente previstos.

La remoción no tiene necesariamente carácter penal —de ahí su distinción con la privación—, pues su motivo primario no es la punición de un delito sino la búsqueda del bien público. De hecho la remoción puede ser impuesta por circunstancias que no implican culpabilidad alguna en el removido pero que, por el bien de la comunidad, exigen la cesación del titular del oficio¹¹⁶.

En el CIC 17 se hablaba de este supuesto en un solo canon (c. 192) con tres párrafos que el nuevo Código ha desdoblado en dos cánones (cc. 192 y 193) añadiendo el c.194 sobre las causas de la

¹¹⁵. Cfr F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, t. II, Romae 1943, p. 419, n. 360.

¹¹⁶. Cfr F. BOLOGNINI, *Lineamenti di Diritto Canonico*, Torino 1992, p. 148.

remoción *ipso iure*, que es una reelaboración del antiguo canon sobre la renuncia tácita (c. 188 CIC 17), ahora desaparecido como tal.

En la legislación de 1917 no se hablaba de «remoción» sino que se utilizaba el término «privación» (cfr c. 192) con significado genérico y no sólo penal. Pero, de hecho, la doctrina limitaba el uso del término «privación» a los casos penales, mientras que utilizaba el término «remoción» para los casos en los que no se seguían procedimientos judiciales sino administrativos. Se puede entender la diversidad de terminología entre el CIC 17 y la doctrina si se tiene en cuenta que estos procedimientos administrativos habían sido introducidos oficialmente en el Derecho canónico solamente en 1910¹¹⁷, en pleno proceso de elaboración codicial.

La remoción, como hemos dicho, puede ser *ipso iure* (c. 194) o *ab homine* (c. 193): una de las diferencias prácticas entre estos dos tipos de remoción estriba en que los efectos de la *ipso iure* son *ex tunc*, o sea, se retrotraen al momento de la comisión del hecho que constituye causa de la remoción, mientras que la remoción impuesta por acto de la autoridad tiene efectos *ex nunc*. De este modo, la remuneración del oficio, los actos puestos por el titular, etc., desde la comisión del hecho deberán devolverse o sanarse una vez declarada la remoción *ipso iure*¹¹⁸.

En el canon que comentamos existe una disposición innovadora respecto al CIC 17: se trata de la protección jurídica de los derechos adquiridos por contrato si la remoción se efectúa mediante decreto (no así para las *ipso iure*). Derechos adquiridos tanto por el titular como por terceros¹¹⁹. Los derechos adquiridos protegidos por este canon son sólo los provenientes del contrato (p.ej.: seguro sanitario, pensión, casa, etc.). La letra del canon parece, pues, suponer que la remoción que lesionara derechos adquiridos durante el ejercicio del oficio mediante otros medios (prescripción, costumbre, etc.) no debería considerarse inválida, constituyendo así una de las previstas excepciones a lo dispuesto por el c. 38. El problema es digno de una interpretación auténtica.

¹¹⁷. Cfr SCC, Decr. *Maxima cura*, 20.VIII.1910, en AAS 2 (1910), p. 636 ss.

¹¹⁸. Cfr B. OJETTI, *Commentarium in Codicem iuris canonici*, t. IV, Roma 1931, p. 136, nota 6.

¹¹⁹. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico, commento giuridico-pastorale*, vol. I, Napoli 1988, p. 253, n. 1132.

Es conveniente que en la colación de oficios, sobre todo en el caso de laicos, la relación laboral con la Iglesia se establezca mediante un título contractual¹²⁰, que muchas veces se habrá formalizado mediante un contrato civil (cfr c. 494), y «parece aconsejable introducir en dicho contrato las necesarias cláusulas que hagan posible que las prescripciones canónicas de éste cap. puedan tener también eficacia jurídica en el ámbito del derecho civil»¹²¹.

Sin embargo, si el titular de un oficio diocesano es un religioso, la remoción puede hacerse libremente, ya sea por parte del Obispo de la diócesis, ya sea por parte del Superior religioso competente, incluso sin el consentimiento del otro, bastando la simple notificación (c. 682 § 2; cfr RGCR, 45 § 2).

La remoción del abogado durante el juicio, prevista por el c. 1486 § 1, no corresponde estrictamente al concepto que estamos utilizando aquí, puesto que no se pierde el oficio eclesiástico sino tan sólo su ejercicio en una causa concreta.

La autoridad competente para remover será la misma que puede conferir el oficio (por analogía con el c. 189)¹²². Su potestad para remover es autónoma, no necesita el consentimiento de nadie: y esto no sólo en la remoción de los oficios conferidos por libre colación, sino incluso en la de aquellos vinculados a presentación o elección¹²³.

De la «remoción» debe distinguirse adecuadamente la figura de la «rescisión de la provisión» del oficio (c. 149 § 2): la diferencia está en que, para la rescisión, la provisión del oficio debe ser todavía reciente. Sería conveniente que las normas sobre la rescisión fueran más concretas, especificando, por ejemplo, las causas y procedimientos para esta rescisión, quizás remitiendo a las normas de la remoción de los oficios. De otra manera, quedaría al arbitrio de la autoridad el rescindir la provisión de cualquier oficio, que, en sustancia, equivaldría a la remoción «ad nutum auctoritatis» y, como veremos, ésta se puede aplicar sólo para determinados oficios.

P. Gefaell

¹²⁰. Cfr *Comm.* 21 (1989), p. 230.

¹²¹. J.I. ARRIETA, *Comentario al cap. II. «De ammissione officii ecclesiastici»*, en *CIC Pamplona*, p. 158.

¹²². Cfr J. MANZANARES, *Comentario al c. 192*, en *CIC Salamanca*.

¹²³. CHIAPPETTA, *Il Codice...*, cit., p. 253, n. 1130.

193 § 1. **Ab officio quod alicui confertur ad tempus indefinitum, non potest quis amoveri nisi ob graves causas atque servato procedendi modo iure definito.**

§ 2. **Idem valet, ut quis ab officio, quod alicui ad tempus determinatum confertur, ante hoc tempus elapsum amoveri possit, firmo praescripto can. 624, § 3.**

§ 3. **Ab officio quod, secundum iuris praescripta, alicui confertur ad prudentem discretionem auctoritatis competentis, potest quis iusta ex causa, de iudicio eiusdem auctoritatis, amoveri.**

§ 4. **Decretum amotionis, ut effectum sortiatur, scripto intimandum est.**

§ 1. Nadie puede ser removido de un oficio conferido por tiempo indefinido, a no ser por causas graves y observando el procedimiento determinado por el derecho.

§ 2. Lo mismo vale para que pueda ser removido antes del plazo prefijado, el que recibió un oficio por tiempo determinado, sin perjuicio de lo establecido en el c. 624 § 3.

§ 3. Puede ser removido, por causa justa a juicio de la autoridad competente, aquel a quien, según las prescripciones del derecho, se ha conferido un oficio por un tiempo que queda a la prudente discreción de la autoridad.

§ 4. Para que produzca efecto el decreto de remoción, deberá intimarse por escrito.

FUENTES: § 1: c. 192 § 2

§ 3: c. 192 § 3

CONEXOS: cc. 192-195, 253 § 3, 318 § 2, 477 § 1, 430 § 2, 485, 494 § 2, 552, 554 § 3, 563, 572, 624 § 3, 682 § 2, 805, 810 § 1, 1420 § 5, 1422, 1436 § 2

COMENTARIO

Pablo Gefaell

El canon 193 trata de la remoción impuesta por acto de la autoridad competente. En principio recoge las disposiciones del c.192 § 2 del CIC 17, pero contiene diversas novedades que veremos enseguida.

1. *Historia del canon*

En el CIC 83 se ha suprimido toda referencia a los oficios amovibles e inamovibles (*vide* comentario al c. 522), pues en el Vaticano II (CD, 31) se había decidido suprimir los oficios inamovibles, ya que parecían poco oportunos. Sin embargo, en el *iter* redaccional de este canon se puso de relieve que, a pesar de que hoy se pueda remover de cualquier oficio, es necesaria —al menos para los laicos, a causa de sus familias— una cierta estabilidad en éstos, y por tanto la estabilidad debería ser igual a la que gozan los funcionarios en la legislación civil de los Estados¹²⁴.

Como entre los oficios eclesiásticos existen unos con más estabilidad que otros, en la Comisión revisora se propuso distinguir la normativa de la remoción para los conferidos *ad nutum auctoritatis* — que son los menos estables— de aquella prevista para los de los oficios . Además, se decidió que la remoción de los oficios conferidos por un tiempo determinado debía equipararse —en cuanto a causas y procedimientos— a la remoción de los oficios vitalicios, en el caso de que se quisiera proceder a la remoción antes de cumplirse el plazo previsto para el cese del titular¹²⁵. Más adelante se cambió la expresión por la actual , con menor connotación de arbitrariedad¹²⁶. Sin embargo, en el c. 682 § 2 se sigue utilizando la antigua expresión. Finalmente, dado que en la legislación común el único oficio hoy existente es el de Romano Pontífice, se cambió esta expresión por la de oficio , que es la que ha permanecido, prefiriéndose decir a porque expresa mayor estabilidad¹²⁷.

Respecto a la estabilidad de los oficios conferidos para un tiempo determinado, se puede decir que ¹²⁸.

2. Estabilidad de los oficios y remoción

Teniendo presente lo hasta aquí dicho, y examinando el contenido del actual c. 193, se constata una tipología nueva de los oficios en cuanto a su estabilidad: *a*) oficios conferidos por tiempo indefinido (§ 1); *b*) oficios conferidos para un tiempo determinado (§ 2); *c*) oficios cuya duración se deja a la prudente discreción de la autoridad (§ 3).

¹²⁴. Cfr *Comm.* 21 (1989), p. 230.

¹²⁵. Cfr *Ibidem*, pp. 230-231.

¹²⁶. Cfr *Comm.* 22 (1990), p. 98.

¹²⁷. Cfr *Comm.* 23 (1991), p. 266.

¹²⁸. Cfr *Comm.* 13 (1981), p. 272. (*Vide* comentario al c. 522).

Para los dos primeros tipos pueden verse los ejemplos referidos en el comentario al c. 186. En cambio, oficios del tercer tipo son aquellos que, a pesar de ser conferidos por un tiempo determinado o indeterminado —nótese que no decimos —, sus titulares pueden ser removidos libremente por la autoridad competente. Son ejemplos de este tipo en el CIC: el oficio de Vicario general y el de Vicario episcopal, si no son Obispos (c. 477 § 1), el de Canciller y demás notarios de la curia diocesana (c. 485), el de vicario parroquial (c. 552), el de arcipreste (c. 554), el de rector de una iglesia (c. 563), el de capellán (c. 572) y cualquier oficio diocesano que ocupe un religioso o un miembro de una sociedad de vida apostólica (cc. 682 § 2, 738 § 2)¹²⁹.

A primera vista, la normativa del CIC sobre la remoción de estos tres tipos de oficio podría parecer paralela, por no decir igual, a la del CIC 17 relativa a la remoción administrativa de los oficios inamovibles, de los oficios parroquiales amovibles y de los oficios amovibles no parroquiales¹³⁰; sin embargo, la normativa del código anterior se ha simplificado notablemente, y se han introducido cambios de importancia.

En efecto, si analizamos la normativa del viejo código, se puede ver que, a fin de cuentas, se podía remover por cualquier causa justa y sin especial procedimiento () de cualquier oficio eclesiástico excepto de los oficios parroquiales, los cuales —fuesen amovibles o inamovibles— exigían siempre un procedimiento administrativo regulado por el CIC 17 en los cc. 2147 ss. y 2157 ss. Los demás oficios inamovibles sólo podían ser removidos por vía judicial¹³¹.

En la actual normativa, en cambio, la sólo es aplicable a los oficios conferidos (c. 193 § 3). Los demás oficios —temporales o a tiempo indefinido— exigen grave causa y procedimiento previsto por el derecho (c. 193 §§ 1 y 2).

3. *La causa de la remoción*

¹²⁹. Cfr, p.ej., las referencias al c. 682 § 2 que hacen los cc. 1742 § 2, 552, y 563.

¹³⁰. Cfr, p.ej., F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonikum*, t. II, Romae 1943, p. 422, n. 363.

¹³¹. C. 192 § 2 CIC 17. Cfr B. OJETTI, *Commentarium in Codicem iuris canonici*, t. IV, Roma 1931, p. 137; A. ALONSO LOBO, *Oficios eclesiásticos*, en VV.AA., *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, t. I, Madrid 1963, p. 486, n. 482.

a) Para la remoción, también llamada o, aplicable a los oficios menos estables, el c. 193 § 3 precisa que basta *cualquier causa justa*. Aunque la palabra, inicialmente presente, haya sido suprimida del texto¹³², no se puede excluir ninguna causa que sea verdaderamente. La causa de esta remoción puede ser la simple utilidad o conveniencia, teniendo presente que la causa de la estabilidad de los oficios no es otra que el bien de las almas¹³³.

La justicia de la causa es valorada por la misma autoridad que remueve, la cual, en cualquier caso, en ese juicio deberá guardar la *equidad natural*, como se decía en el viejo canon 192 § 3. Este deber implica que el Superior actúe con comprensión y con las suficientes cautelas para que, en lo posible, la fama del interesado no quede lesionada o se le deje en indignancia (cfr c. 195). La equidad natural exigirá, también, que se informe al interesado de los motivos de su remoción, cara a un posible recurso. Sin embargo, en algún caso, la misma equidad natural puede exigir que no se hagan públicas las causas de la remoción. La referencia a la equidad se suprimió del texto porque se suponía como principio informador de todo el Derecho canónico (*vide* comentario al c. 190).

b) La remoción de los oficios a tiempo indefinido y la de los conferidos a tiempo determinado si es antes de su término previsto, exige *causa grave*.

Los sucesivos proyectos de este canon habían mantenido la antigua normativa que, para este tipo de remoción administrativa, sólo admitía las causas *a iure determinatas*. El derecho común indica una serie de causas en el c. 1741 (*vide* c. 2147 § 2 CIC 17), pero tanto en el actual Código como en el anterior, estos cánones indican las causas de modo no taxativo (*praesertim*¹³⁴). Por tanto, para no caer en una rígida enumeración de las causas de remoción administrativa, en los últimos pasos de la revisión del Código en vez de la antigua expresión se decidió usar la actual, que es más genérica¹³⁵. Así, no sólo podrán ser establecidas nuevas causas a través del derecho particular, sino que en cada situación concreta la autoridad podrá juzgar si existe grave causa para la remoción de estos oficios. Generalmente será una de las

¹³². Cfr *Comm.* 22 (1990), p. 98.

¹³³. Cfr CD, 31. (*Vide* comentario al c. 522).

¹³⁴. Cfr B. OJETTI, *Commentarium...*, cit, p. 138, nota 12.

¹³⁵. Cfr *Comm.* 23 (1991), p. 266.

previstas por el Derecho, pero el canon permite identificar eventualmente otras graves razones¹³⁶; aunque nos parece que, si las causas graves no son taxativas, casi se puede hablar de una normativa igual que para las causas de la remoción .

Sin embargo, cuando en el c. 1422 se exige causa no sólo grave sino también , pensamos que —a la luz de la antigua normativa— la remoción sólo podrá hacerse por las causas indicadas taxativamente en el derecho. Como el derecho común no indica causas específicas para la remoción de los jueces, éstas deberán ser indicadas por el derecho particular. De otro modo no tendría sentido la exigencia de causa . El CCEO, c. 1088 § 1 —paralelo al c. 1422 del CIC— evita la frase del CIC sobre las causas de remoción para los jueces, aplicando simplemente la normativa general.

4. *El procedimiento para la remoción:*

a) *La remoción*

En la remoción de los oficios conferidos *ad nutum auctoritatis* no se prevé ningún procedimiento especial. El hecho de que no exista un procedimiento especial no significa que se pueda actuar de cualquier manera¹³⁷. La remoción no es una remoción : se exige, en todo caso, el procedimiento general previsto por el Derecho, y, además, como ya hemos indicado, el deber de guardar la equidad natural exigirá proceder con unas ciertas cautelas.

No se trata de una cuestión de simple información al interesado acerca de su remoción. Se deberá siempre proceder mediante decreto de remoción, y, por tanto, se deberán seguir los cánones previstos para los actos administrativos en general (cc. 35-47) y para los decretos singulares en especial (cc. 48-58). Por tanto:

a) La autoridad debe *informarse* cuidadosamente en orden a determinar si existe *causa justa* para la remoción: no bastan las acusaciones anónimas o las sospechas (c. 50).

b) En lo posible, *oír* a aquellos cuyos derechos pueden ser lesionados por la remoción (c. 50) y, lógicamente, en primer lugar al mismo interesado *antes* de tomar la decisión de removerlo. El Código

¹³⁶. Cfr R.R. CALVO-N.J. KINGLER (Eds.), *Clergy Procedural Handbook*, Washington 1992, p. 124.

¹³⁷. Cfr *ibidem*, p. 122.

oriental indica también el deber de la autoridad de manifiestar al interesado, antes de dar el decreto, las noticias y pruebas que le dan motivos para la remoción, para que se pueda defender, respondiendo dentro de un término fijado por la autoridad (cfr c. 1517 § 2 CCEO).

c) En el decreto se deben incluir —al menos sumariamente— los *motivos* de la remoción (c. 51), aunque ya vimos que la equidad exige proteger la fama del removido en lo posible y, por consiguiente, se podrían alegar en el decreto razones secundarias ocultando la principal, aunque ésta no se debe ocultar al interesado. El Código oriental, muy acertadamente, establece que *vero periculum publici vel privati damni obstat, ne motiva patefaciat, haec in libro secreto exprimantur atque ei, qui de recursu forte adversus decretum interpositum videt, ostendantur, si ipse petit* (c. 1519 § 2 CCEO).

d) En el caso de remoción de oficios, el decreto —para que surta efecto— debe ser *intimado por escrito* (c. 193 § 4). Los cc. 37 y 51 exigen que el acto en sí se emita por escrito, y, para ser eficaz, su intimación también (c. 54 § 2), aunque se prevé, en ciertos casos, que pueda hacerse oralmente (c. 55). Pues bien, en el caso de la remoción nunca cabe la intimación oral.

e) En todo caso, el decreto y el documento de notificación deben estar firmados, fechados y certificados.

El Derecho, además, puede concretar, dentro del marco general, causas y procedimientos que deben seguirse para la remoción de oficios que, en principio, no necesitarían especial procedimiento¹³⁸. Así hace, por ejemplo el RGCR para los oficios de la Curia romana que —por regla general— serían removibles *ad prudentem discretionem auctoritatis*: los arts. 45, 60 § 6, 58-59, 71-81 prevén diversos modos de llevar a cabo la remoción, aunque se trata, casi siempre, de simples especificaciones del derecho común. En el caso de los arts. 71-81 se habla de la remoción por motivos disciplinarios, que tratándose de oficios *ad nutum auctoritatis* puede realizarse también mediante remoción, pero su especial gravedad exige procedimientos más específicos.

b) *La remoción estrictamente*

¹³⁸. Cfr *ibidem*, p. 122.

En la remoción de los oficios conferidos a tiempo indefinido y de los oficios temporales antes de su término natural, el procedimiento administrativo que se debe seguir será el prescrito por el Derecho.

El derecho común prescribe un procedimiento especial para la remoción de los párrocos (cc. 1740-1747), que no se aplica a los párrocos religiosos o miembros de una sociedad de vida apostólica ya que éstos pueden ser removidos libremente (cfr cc. 682 § 2 y 738 § 2). También se prevé en el CIC un procedimiento especial para la remoción del administrador diocesano, si ésta se quiere realizar antes del término de su encargo (c. 494 § 2). Los Superiores religiosos pueden ser removidos de su oficio antes de la expiración de su mandato conforme a las causas establecidas en su derecho propio (c. 624 § 3), regla aplicable también a las sociedades de vida apostólica (c. 734).

Si aplicamos a la remoción en general lo establecido en el c. 1747 § 3 —que se refiere a la remoción de párrocos¹³⁹—, se sigue que contra cualquier decreto de remoción cabe recurso en suspensivo. Se podría objetar que esto es una extensión arbitraria de un caso particular, pues en el CIC 17 (c. 192) sólo se preveía el recurso en devolutivo (cfr, también, c. 2146 CIC 17); sin embargo hoy no puede ponerse en duda el efecto suspensivo del recurso contra *cualquier* remoción, si tenemos en cuenta también que el actual c. 143 establece en este caso la suspensión de la potestad ordinaria del oficio que está en cuestión: si la ejecución del decreto de remoción no quedase suspendida, la disposición del c. 143 no tendría sentido.

P. Gefaell

¹³⁹. Sobre el tema, cfr A. MENDOZA, *The effect of the Recourse against the Decree of Removal of a Parish Priest*, en , 25 (1991) pp. 139-153.

- 194** § 1. **Ipsa iure ab officio ecclesiastico amovetur:**
 1° **qui statum clericalem amiserit;**
 2° **qui a fide catholica aut a communione Ecclesiae publice defecerit;**
 3° **clericus qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit.**
 § 2. **Amotio, de qua in nn. 2 et 3, urgeri tantum potest, si de eadem auctoritatis competentis declaratione constet.**

§ 1. *Queda de proprio derecho removido del oficio eclesiástico:*

- 1° *quien ha perdido el estado clerical;*
 2° *quien se ha apartado públicamente de la fe católica o de la comunión de la Iglesia;*
 3° *el clérigo que atenta contraer matrimonio, aunque sea sólo civil.*

§ 2. *La remoción de que se trata en los nn. 2 y 3 sólo puede urgirse si consta de ella por declaración de la autoridad competente.*

FUENTES: § 1: c. 188, 4° et 5°

CONEXOS: cc. 192, 290, 527 § 3, 1336 § 1,5°, 1336 § 2

COMENTARIO

Pablo Gefaell

1. *Concepto*

La remoción *ipso iure* es aquella decretada por el mismo Derecho. Doctrinalmente, se mantiene que es posible sólo en los casos taxativamente determinados en este canon¹⁴⁰, aunque más adelante podremos indicar algunos casos no previstos en el mismo.

Se trata de una remoción administrativa del oficio, no de una sanción penal (en los casos como éste no caben penas *latae sententiae*: cfr c. 1336 § 2), ya que no busca el castigo del titular del oficio a causa de un delito cometido, sino la tutela del interés de la administración pública en casos gravísimos en los que el titular del oficio —culpable o inculpablemente— se ha colocado en una situación que es incompatible con el servicio público correspondiente

¹⁴⁰. Cfr J. MANZANARES, *Comentario al c. 192*, en *CIC Salamanca*; J.I. ARRIETA, *Organizzazione ecclesiastica, lezioni di Parte generale (ad usum scholarum)*, Roma 1991-1992, p. 260; L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico, commento giuridico-pastorale*, vol. I, Napoli 1988, p. 255, n. 1138; etc.

al oficio. Tratándose de remoción automática es lógico que el Derecho señale taxativamente y reduzca al mínimo los casos de remoción *ipso iure*.

2. Origen del canon

Al inicio de los trabajos de revisión, se decidió trasladar al presente apartado sobre la remoción el contenido del c. 188 del CIC 17, que trataba de la renuncia tácita al oficio¹⁴¹. Probablemente esta decisión resultó excesivamente simplificadora, pues implicaba la supresión —al menos en el derecho común— de la categoría de la al oficio, que a nuestro juicio es necesario reconocer en determinados casos, ya que, de lo contrario, resultaría demasiado riguroso declarar la —con la consiguiente lesión de la fama del cesante— en casos de conductas que, de por sí, tan sólo indican la voluntaria al oficio (*vide* comentario al c. 187).

El c. 188 del CIC 17 recogía hasta ocho casos taxativos de , es decir, casos en los que el hecho voluntariamente puesto por el titular de un oficio implicaba —con presunción *iuris et de iure*— el ánimo de renunciar al mismo, dando ocasión a la automática aceptación de la renuncia y quedando con ello vacante *ipso facto* el oficio, sin necesidad de ulterior declaración¹⁴².

De todos modos, el actual c. 194 no proviene exclusivamente de la reducción del antiguo canon sobre la renuncia tácita, sino que recoge tres casos de remoción *ipso iure*: dos de ellos provenientes del antiguo c. 188 (nn. 4º y 5º) y el tercero correspondiente al c. 213 § 1.

Desde el primer proyecto del nuevo canon se estableció la exigencia de que constase la declaración de la autoridad para poder urgir la remoción y se diferenciaron también las causas de remoción que afectaban sólo a los clérigos de aquellas otras generales para todos¹⁴³.

Durante los trabajos de revisión se criticaron, una a una, todas las causas propuestas, llegándose a dudar de la misma necesidad del canon, ya que —se decía— casi todos los supuestos exigen y pueden ser decididos por decreto de la autoridad. Al final se decidió dejar

¹⁴¹. Cfr. *Comm.* 21 (1989), p. 229.

¹⁴². Cfr. B. OJETTI, *Commentarium in Codicem iuris canonici*, t. IV, Roma 1931, p. 128; A. ALONSO LOBO, *Oficios eclesiásticos*, en VV.AA., *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, t. I, Madrid 1963, p. 482, n. 476.

¹⁴³. Cfr. *Comm.* 21 (1989), p. 231.

solamente los actuales supuestos, entre otras razones, porque de los casos suprimidos ya se ocupaba el derecho penal¹⁴⁴.

3. *Los casos suprimidos*

Veamos cuáles eran los casos recogidos en el antiguo c. 188 que han sido suprimidos en la nueva normativa. Es conveniente precisar, antes de nada, que se ha suprimido sólo el carácter *automático* de la pérdida del oficio por dichas causas, ya que estos mismos casos normalmente constituyen causa justa para la remoción por decreto.

a) *La profesión religiosa* (c. 188,1º CIC 17): se suprimió como causa de remoción *ipso iure* porque, en primer lugar, no se trataba de remoción, sino de renuncia tácita; en segundo lugar, porque tal disposición legal no vale para los miembros de institutos seculares; y, finalmente, porque el asunto se regula ya en el derecho de los religiosos¹⁴⁵ (cfr cc. 671, 682).

b) *La negligencia en tomar posesión* (c. 188,2º CIC 17): se suprimió porque parecía demasiado riguroso establecerla como causa de remoción automática, pues su razón de ser sólo se entendía dentro del sistema benefical, ahora abrogado¹⁴⁶. Sin embargo, en el nuevo Código se establece que la negligencia en tomar posesión del oficio de párroco puede dar lugar a que el Ordinario *declare* vacante la parroquia (c. 527 § 3). Dado que en este caso no se habla de acto constitutivo de remoción, sino de acto declarativo de vacación del oficio parroquial, ¿se debe entender como un caso de remoción *ipso iure*? Si no se quiere considerar aquí la remoción *ipso iure*, se puede entender como un caso de (*vide* comentario al c. 187), así como ha sido previsto también en el RGCR,63,1º, que declara renunciante a quien sin justificado motivo no asume el servicio en la fecha fijada por la carta de nombramiento.

c) *La incompatibilidad de oficios* (c. 188,3º CIC 17; *vide* el actual c. 152 y comentario): se suprimió por entenderse que quien debe juzgar de la incompatibilidad y del estado de necesidad en cada caso es únicamente el Superior, y no el mismo Derecho¹⁴⁷. Hay algunos autores que, basándose en la prohibición del c. 152, siguen afirmando

¹⁴⁴. Cfr *Comm.* 23 (1991), pp. 267-268.

¹⁴⁵. Cfr *Comm.* 23 (1991), p. 267.

¹⁴⁶. *Ibidem*.

¹⁴⁷. Cfr *Comm.* 22 (1990), pp. 99-100.

la cesación automática del primer oficio si es incompatible con el nuevo, e incluso consideran (cfr c. 1381 § 2) a quien retiene el primer oficio¹⁴⁸. Más acertada nos parece la opinión de Erdö, quien sostiene que en la nueva normativa ha desaparecido la cesación automática por esta causa¹⁴⁹. Será pues el Superior quien declare la incompatibilidad y decreta —si lo considera necesario— la remoción del primer oficio. Por tanto, la declaración de incompatibilidad será sólo motivo legítimo para proceder a la remoción, pero no causa de remoción *ipso iure*. El CIC 17 preveía la privación automática de ambos oficios incompatibles si el titular, con pertinacia, quería retenerlos simultáneamente (c. 2396 CIC 17).

d) *El alistarse voluntariamente en la milicia secular* (c. 188,6° CIC 17): es una causa que desapareció del nuevo canon sin que se indiquen los motivos, pero quizás sea debido a que la prohibición afecta sólo a clérigos y religiosos (cfr cc. 289 § 1 y 672), y, en estos casos, el propio Ordinario puede —y acaso deba— actuar directamente. Aunque el Código no prevea esta causa de cesación automática, en el RGCR, 63,2°, se considera que renuncia tácitamente al oficio quien .

e) *Abandono del traje eclesiástico*: en *Communicationes* no se señalan las razones para la supresión de este supuesto, contemplado en el c. 188,7° CIC 17. En cualquier caso, se trata de un supuesto disciplinar que requeriría la intervención directa de la autoridad, pero no la automaticidad del Derecho.

f) *El abandono de la residencia obligatoria* (c.188,8° CIC 17): esta causa se suprimió como motivo de remoción automática porque ya se contempla en el derecho penal¹⁵⁰ como supuesto de posible privación del oficio y no como remoción automática (cfr c. 1396).

Inicialmente se propuso incluir también el *abandono público del oficio* como nueva causa de remoción *ipso iure*, pero luego se abandonó esta idea porque exigía investigación y declaración por parte de la autoridad y, por tanto, podría removerse por decreto¹⁵¹. Sin embargo, el RGCR, 63,3° considera sujeto de renuncia tácita a «chi

¹⁴⁸. Cfr J. MANZANARES, *Comentario al c. 152*, en *CIC Salamanca*.

¹⁴⁹. Cfr P. ERDÖ, *De incompatibilitate officiorum, specialiter paroeciarum. Adnotationes ad cann. 152 et 526*, en , 80 (1991), p. 506.

¹⁵⁰. *Comm.* 23 (1991), p. 267.

¹⁵¹. Cfr *Comm.* 21 (1989), p. 231, c. 10 § 1,6°; *ibidem*, 22 (1990), p. 99-100, c. 45 § 1,5°; *Ibid.*, 23 (1991), p. 267.

senza giustificato motivo: ...risulti arbitrariamente assente dall'ufficio per cinque giorni consecutivi e non riprenda servizio entro il termine di cinque giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di presentarsi, che il Superiore deve presentare per iscritto». En el CIC 17 se preveían algunos casos de privación penal impuesta por el mismo Derecho¹⁵².

Como hemos dicho, según la doctrina, los casos de remoción *ipso iure* deberían ser los taxativamente previstos por el Código; sin embargo, también vimos cómo hay otras situaciones no previstas por este cuerpo legal que, por su significado, exigen la declaración de la pérdida automática del oficio. Por tanto, se puede admitir que el Derecho establezca causas de , como lo ha hecho el RGCR, aunque la figura no exista en el Código en cuanto tal. De éste modo se logra respetar la doctrina sobre el carácter taxativo de la remoción *ipso iure*, aunque enseguida veremos otros casos que la contradicen directamente.

4. Los casos previstos de remoción

a) *Quien ha perdido el estado clerical*: la pérdida del estado clerical se produce por decreto, rescripto o sentencia (cfr cc. 290, 1336 § 1,5º). Ello no significa necesariamente una sanción o pena, puesto que también puede ser debida a invalidez de la ordenación o a causa de gravísimos motivos de naturaleza no penal. Aunque algunos opinan lo contrario¹⁵³, la remoción en este canon no tiene nunca carácter penal, sino administrativo: es tan sólo un efecto reflejo de la situación de no idoneidad para el desempeño de oficios eclesiásticos que se viene a producir por la pérdida del estado clerical¹⁵⁴. Por eso, el verbo , usado en el c. 292, no tiene el sentido estricto de remoción penal (*vide* comentario al c. 196).

b) *Quien ha abandonado públicamente la fe católica o la comunión eclesiástica*: la diferencia fundamental entre este supuesto y el contemplado en el c. 188,4º del CIC 17 es que en la nueva normativa, además del abandono de la fe católica, se añade el abandono de la comunión eclesiástica.

¹⁵². Cc. 2266, 2396, 2397, 2398 CIC 17.

¹⁵³. Cfr L. CHIAPPETTA, *Il Codice...*, cit., p. 253, n. 1129.

¹⁵⁴. Cfr B. GANGOTTI, *Comentario al c. 194*, en VV.AA., *CIC*, Valencia 1993, p. 115.

El problema, en este caso, será interpretar cuándo hay abandono de la fe o la comunión. Algunos autores mantienen que el abandono ha de ser público, pero no necesariamente ¹⁵⁵. Pero si por se entiende , y no únicamente será problemático establecer el momento de la pérdida del oficio. El tema tiene su relevancia, puesto que, si se dan los requisitos de sin que haya sido todavía declarado por la autoridad (*vide infra*, n. 5), el oficio se pierde realmente —aunque la remoción no pueda ser urgida—, y por tanto los actos realizados en el ejercicio del oficio serían nulos (*vide* comentario al c. 192).

En el derecho penal, para calificar como delictivo el abandono de la fe o de la comunión, se exige que tal abandono sea un hecho , por tanto en cuanto , no necesariamente en cuanto o . Debe suponerse que, en la remoción administrativa *ipso iure* por abandono público de la fe o de la comunión, se use el término en este mismo sentido.

Es bien sabido que los delitos de herejía, apostasía y cisma están castigados con la pena *latae sententiae* de excomunión (c. 1364 § 1; cfr c. 751), la cual, antes de ser declarada, causa sólo la prohibición penal del del oficio (c. 1331 § 2,3°); la ulterior declaración autoritativa de esta excomunión produce, en cambio, la inhabilidad para nuevos oficios (c. 1331 § 2,4°). Teniendo presente que en este caso —contemporáneamente a la pena *latae sententiae* no declarada— el titular ha sido removido *ipso iure* de su oficio, se puede afirmar que no sólo se del oficio sino que lo estrictamente. Dicha pérdida —administrativa— no se configura como una pena añadida, sino como una inadecuación para el desarrollo de la función administrativa debido a la situación jurídica personal producida por la excomunión¹⁵⁶.

c) *El clérigo que atenta contraer matrimonio, aunque sea sólo civilmente*: la cláusula no es superflua, pues establece que también el matrimonio civil debe considerarse atentado de matrimonio. Efectivamente, en principio, el matrimonio civil no tiene relevancia jurídica en el ordenamiento canónico y, por tanto, si en el CIC no se indicase expresamente, el clérigo que celebrara matrimonio civil no incurriría en atentado de matrimonio¹⁵⁷.

¹⁵⁵. V. DE PAOLIS-A. MONTAN, *Normae Generali*, en VV.AA., *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, vol. I, Roma 1988, p. 427-428. L. CHIAPPETTA, *Il Codice...*, cit., p. 255, n. 1140.

¹⁵⁶. Cfr B. OJETTI, *Commentarium...*, cit., p. 130.

¹⁵⁷. Cfr V. DE PAOLIS-A. MONTAN, *Normae Generali*, cit., p. 428.

Esta causa —el atentado de matrimonio civil— no se aplica a los laicos ni a los religiosos no clérigos. Durante los trabajos de redacción se propuso incluir la mención del laico que atenta matrimonio civil, pero se rechazó como no conveniente, pues la remoción *ipso facto* debía restringirse a los casos más graves¹⁵⁸. En tales supuestos, aunque se atente inválidamente matrimonio, no se pierde el oficio *ipso iure*, aunque, como es lógico, el hecho se podrá estimar como causa suficiente para la remoción *ab homine*, mediante decreto. Incluir, por vía del derecho particular, el matrimonio civil del laico como causa de pérdida automática del oficio, como proponen algunos autores¹⁵⁹, significaría contradecir el carácter taxativo de los casos de remoción *ipso iure* indicados en este canon (*vide supra*).

En el caso de clérigos que atentan matrimonio, la razón de la remoción tampoco es o , sino que se debe a la falta de idoneidad de la persona para ejercer funciones de autoridad en la administración pública por estar en situación de escándalo público.

El RGCR, 80, nos ofrece un claro caso de remoción (destitución) *ipso iure* no previsto por el Código: incorre nella destituzione di diritto, escluso il procedimento disciplinare, per condanna passata in iudicato concernente delitto doloso.... Esta disposición pone en cuestión, una vez más, la doctrina sobre el carácter taxativo de los casos de remoción *ipso iure* previstos por el c. 194.

Es conveniente hacer notar que algunos casos, aunque a primera vista podrían aparecer como una pérdida automática del oficio obtenido, no son remociones *ipso iure*, sino provisiones inválidas (p. ej., la provisión simoníaca del c. 149 § 3): el oficio, poseído , jamás se ha poseído .

5. Intervención de la autoridad para la pérdida efectiva del oficio

Al considerar los requisitos generales de la pérdida de los oficios eclesiásticos se ha indicado que siempre es necesaria la intervención de la autoridad para la cesación efectiva del titular (*vide* comentario al c. 184). La pérdida *ipso iure* parece desmentir la hipótesis, pero esto no es así.

¹⁵⁸. *Comm.* 14 (1982), p. 153.

¹⁵⁹. Cfr R.R. CALVO-N.J. KINGLER (Eds.), *Clergy Procedural Handbook*, Washington 1992, p. 121.

Efectivamente, el c. 194 § 2 establece que, en los casos indicados en los nn. 2º y 3º del § 1, para que la remoción pueda ser urgida jurídicamente es necesaria cierta intervención de la autoridad competente. El acto de la autoridad, en estos casos, no mira directamente a constituir la remoción, sino únicamente a declarar que se ha producido el supuesto de hecho que lleva consigo *ipso iure* la remoción. Esta declaración deberá hacerse —por seguridad jurídica— mediante documento escrito¹⁶⁰, fechado, firmado y certificado a ser posible. Mientras no sea exigible en el fuero externo, el cese en el oficio no será efectivo, pues no se podrá proceder al nombramiento de un nuevo titular, ni evitar que el actual realice los actos propios del oficio y que reciba la correspondiente remuneración. Por tanto la intervención de la autoridad es absolutamente necesaria. Una vez declarado el hecho, y urgida la remoción, se debería proceder a la sanación de los actos eventualmente realizados de modo inválido (*vide supra*), y a exigir —si fuera posible y en pura teoría— la devolución de las remuneraciones recibidas durante el periodo que se retuvo el oficio habiendo perdido la titularidad, aunque en algún caso esta remuneración quizás se deba en justicia al ex-titular, porque —de hecho— haya trabajado durante ese intervalo ejerciendo las funciones propias del oficio.

Para la remoción por pérdida del estado clerical, el c. 194 § 2 no exige la intervención de la autoridad, lo que parecería contradecir la necesidad absoluta de dicha intervención. En realidad también en este caso la autoridad interviene de modo determinante, ya que para que se produzca el supuesto de hecho —la pérdida del estado clerical— se requiere un procedimiento y una decisión de la autoridad competente, que hacen innecesaria una ulterior intervención declarativa.

P. Gefaell

¹⁶⁰. Cfr *Comm.* 23 (1991), p. 267.

195 *Si quis, non quidem ipso iure, sed per decretum auctoritatis competentis ab officio amoveatur quo eiusdem subsistentiae providetur, eadem auctoritas curet ut ipsius subsistentiae per congruum tempus prospiciatur, nisi aliter provisum sit.*

Si alguien es removido de un oficio con el que se proveía a su sustento, no de propio derecho, sino por decreto de la autoridad competente, la misma autoridad debe cuidar de que se provea por tiempo conveniente a su sustento, a no ser que se haya provisto de otro modo.

FUENTES: c. 2299 § 3

CONEXOS: cc. 538, 281 § 2, 1274 §§ 1 y 2, 1350

COMENTARIO

Pablo Gefaell

La doctrina social de la Iglesia ha mantenido siempre la obligación de velar por la honesta sustentación de quienes trabajan. Así, el c. 1286 establece que los administradores de bienes han de observar cuidadosamente también las leyes civiles en materia laboral y de seguridad social. Estas mismas leyes civiles, normalmente, prevén compensaciones económicas a la hora de los despidos y de la jubilación. El c. 195 es una concreción de esta solicitud por quienes han desempeñado alguna función de servicio en favor de la Iglesia, indicando la necesidad de cuidar de la honesta sustentación de los removidos del oficio, aunque el derecho civil, en algún caso, no haya previsto tal cosa.

Si bien se trata de un canon nuevo, podemos encontrar precedentes análogos en el CIC 17¹⁶¹. Efectivamente, el viejo c. 2299 § 3 no permitía privar del beneficio a cuyo título fue ordenado el clérigo, si no se prevenía por otro medio a su honesta sustentación, e, igualmente, cuando el CIC 17 trataba de la pena de deposición del clérigo, añadía que el Obispo —por caridad— debía procurar atenderle si verdaderamente lo necesitaba (c. 2303 § 2).

El decreto conciliar PO, en su n. 20, recordaba a los Obispos su obligación de establecer normas para proveer a la honesta sustentación de los sacerdotes. El nuevo canon, sin embargo, no se limita a los clérigos, sino a cualquier titular de oficio, entendido en sentido lato.

¹⁶¹ P.G. MARCUZZI, *Gli uffici ecclesiastici nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, en «Apollinaris», 56 (1983), p. 430.

Durante los trabajos de revisión se intentó tratar este deber en términos de estricta obligación jurídica: «obligatione tenetur curandi ut...»¹⁶². Pero esta redacción fue rechazada porque no se podía aplicar a los laicos: «stricta obligatio providendi subsistentiae admitti tantum debet pro iis qui ab officio clericali amoventur —soli enim clerici oneri sunt Ecclesiae; pro laicis, enim, non potest stricta imponi obligatio»¹⁶³. Por tanto, el texto actual, redactado en forma imperativa simple («auctoritas curet ut...»), no indica estricta obligación jurídica, como podría parecer¹⁶⁴. Consiguientemente, no concede derecho de acción procesal al removido si la autoridad lo incumple.

Aunque el c. 195 no imponga obligación jurídica, hay que notar que el c. 1286 ciertamente exige observar las leyes civiles en materia laboral, que generalmente protegen a los despedidos del empleo. Si se tiene en cuenta, entonces, que los clérigos no mantienen una mera relación contractual con su oficio eclesiástico y, por tanto, no suelen poseer contrato civil¹⁶⁵, este hecho podría provocar la paradoja de que, en esta materia, los laicos estuvieran mejor protegidos que los clérigos. Por lo que parece conveniente buscar garantías también para los clérigos en estas situaciones.

Reflejos del presente canon se pueden encontrar en algunas disposiciones del RGCR: «l'esonero dell'ufficio non comporta la perdita del eventuale trattamento di quiescenza» (art. 72); «la Commissione [disciplinare della Curia romana] qualora decreti il licenziamento dall'ufficio, ne stabilisce gli effetti, tenendo conto del Regolamento per le Pensioni» (art. 74).

Aunque la letra del canon aplique la regla sólo a los casos de «remoción» por decreto, el espíritu de la norma es aplicable a las otras vías de pérdida del oficio eclesiástico, excluidas las *ipso iure*¹⁶⁶.

Algunos autores opinan que la no inclusión de los casos de remoción *ipso iure* (c. 194) en la obligación del c. 195 quizás sea debida a que este tipo de remoción, por regla general, se basa en una conducta antijurídica o contraria al bien común que se hace inmerecedora de un trato de favor, y que, por la misma razón, los casos de privación penal del oficio también se podrían excluir de esta obligación¹⁶⁷. Sin embargo, como consecuencia de lo que hemos visto más arriba, el c. 1350 § 1 impone a la autoridad eclesiástica la estricta obligación de proveer a la honesta sustentación de los

¹⁶². Cfr *Comm.* 22 (1990), p. 100.

¹⁶³. *Comm.* 23 (1991), p. 268.

¹⁶⁴. Cfr R.R. CALVO-N.J. KINGLER (Eds.), *Clergy Procedural Handbook*, Washington 1992, p. 122; J.I. ARRIETA, *Comentario al c. 195*, en *CIC Pamplona*.

¹⁶⁵. Cfr P. ERDÓ, *Quaestiones de officiis ecclesiasticis laicorum*, en «Periodica», 81 (1992), p. 208-209.

¹⁶⁶. Cfr J.I. ARRIETA, *Comentario al c. 195*, en *CIC Pamplona*.

¹⁶⁷. Cfr *ibidem*.

clérigos que han sido privados de su oficio, salvo los expulsados del estado clerical (*vide* comentario al c. 194, 1º). Pero la autoridad debe cuidar incluso de éstos últimos si como consecuencia de la pena se encuentran en verdadera indignidad (c. 1350 § 2). Además, si se tratase de una remoción *ipso iure* debida a la pérdida inculpable del estado clerical (p. ej., por ordenación nula), no sería equitativo ni razonable que la autoridad se considerase eximida de la obligación de resolver la situación según el espíritu del c. 195.

Algunos autores tampoco incluyen en el supuesto del c. 195 a los religiosos removidos de su oficio, porque por la naturaleza de la vida religiosa —dicen— ya están provistos de otra manera¹⁶⁸. Pero habría que ver, caso por caso, si esto es así.

Aunque en los casos de remoción *ipso iure* no se aplique el c. 195, se ha de tener siempre en cuenta el c. 1286 en lo que se refiere a derechos adquiridos, seguridad social, pensión, etc. Los casos de pérdida por renuncia tácita (*vide* comentario al c. 194), debido a su similitud circunstancial con la remoción *ipso iure*, quizás podrían ser también equiparados a éstos en cuanto a estar excluidos de la obligación del c. 195 (cfr RGCR, 64). Para evitar litigios laborales, se ha de procurar que en el contrato laboral queden claras las causas de pérdida automática del oficio y el tratamiento económico posterior del cesado.

Fuera de los casos de remoción, los cc. 231 § 2 y 281 § 2 prevén soluciones para las situaciones de enfermedad, invalidez o ancianidad.

¿Durante cuánto tiempo se debe proveer a la honesta sustentación del removido? Se ha preferido dejar esta cuestión a la prudencia de la autoridad¹⁶⁹. La obligación cesará, en principio, cuando el removido adquiera otro medio para su digna subsistencia. Pero si, por mala fe o negligencia culpable, el removido no tomara la iniciativa para encontrar otras soluciones y se aprovechase de la situación, la autoridad podría libremente interrumpir la ayuda económica para que no se dé una situación de abuso de derecho¹⁷⁰.

P. Gefaell

¹⁶⁸. Cfr R.A. HILL, *Comentario al c. 195*, en CORIDEN-GREEN-HEINTSCHEL (Eds.), *The Code of Canon Law, a text and commentary*, Londres 1985

¹⁶⁹. Cfr *Comm.* 14 (1982), p. 154.

¹⁷⁰. Cfr, por analogía, la decisión del STSA de 6.VII.1971, en X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. IV, Roma 1974, n. 3988.

Art. 4 De privatione*A. 4. De la privación*

196 § 1. **Privatio ab officio, in poenam scilicet delicti, ad normam iuris tantummodo fieri potest.**

§ 2. **Privatio effectum sortitur secundum praescripta canonum de iure poenali.**

§ 1. *La privación del oficio, como pena que es por un delito, solamente puede hacerse según la norma de derecho.*

§ 2. *La privación produce efecto según prescriben los cánones del derecho penal.*

FUENTES: § 1: cc. 2298, 6º, 2299 § 1

CONEXOS: cc. 292, 1336 § 1,2º, 1336 § 2, 1338, 1353, 1381 § 2, 1387, 1389 § 1, 1396, 1457

COMENTARIO

Pablo Gefaell

El término «privación» se restringe en el nuevo Código a la remoción del oficio con carácter penal. La nueva terminología legal, decidida ya desde el primer momento de la revisión de los cánones (no hubo ninguna modificación desde la primera redacción¹⁷¹), quería adecuarse a la usada por la doctrina. En efecto, el CIC 17 utilizaba una terminología en la que el concepto de privación incluía tanto la remoción penal como la administrativa (*vide* comentario al c. 192), pero todos los comentaristas indicaban la remoción penal como sentido estricto de la privación.

Al considerarse como una de las penas expiatorias (c. 1336 § 1,2º), su regulación jurídica queda estrictamente reservada al derecho penal. Si se menciona aquí es por la necesidad sistemática de incluirla como una de las formas de pérdida del oficio eclesiástico.

El § 1 del canon establece que la pena de la privación del oficio sólo puede ser impuesta *ad normam iuris*. Parece una afirmación superflua, porque cualquier remoción —incluso la no penal— debe ser realizada siguiendo las disposiciones del Derecho, y pensamos que la única razón de ser de este párrafo es la de dar ocasión al inciso que formula la nueva

¹⁷¹. Cfr *Comm.* 21 (1989), p. 232.

definición de «privación». El § 2, sin embargo, es el que especifica qué normas rigen la imposición, efectos y cesación de la pena de privación del oficio: las normas del derecho penal.

Veremos ahora las causas y los procedimientos previstos por el derecho penal para la imposición de la pena de privación del oficio.

1. *Causas para infligir la privación del oficio*

Wernz y Vidal enseñaban que, según el c. 2299 § 1 del CIC 17, la privación de un oficio inamovible no podía decidirse sino en los casos *iuris expressis*, y que, en cambio, los oficios amovibles podían ser privados como pena por un delito también en casos no previstos expresamente por el Derecho (o sea, como pena discrecional)¹⁷². Hoy ya no existen los oficios inamovibles (*vide* comentario al c. 193), y el nuevo derecho penal mantiene el principio «nulla poena sine lege poenali praevia» (cfr c. 1321 § 1), que — salvo la excepción del c. 1399— debe ser observado estrictamente¹⁷³.

Las causas de privación previstas por el CIC 83 son las siguientes:

— *Causas de privación facultativa*. Se puede infligir la pena de privación del oficio por algunos delitos en el ámbito del ejercicio de la potestad judicial (c. 1457). El c. 1394 § 1, además, indica otras posibles privaciones indeterminadas para el clérigo que persiste en su atentado de matrimonio, pero tales «privaciones» no pueden referirse a la privación de los oficios que tenía el clérigo, puesto que éstos ya los ha perdido según el c. 194 § 1,1º.

— *Causas de privación obligatoria*. Mientras que el CIC 17 preveía 11 casos de privación obligatoria del oficio¹⁷⁴, el CIC 83 no establece —al menos claramente— ninguna causa que exija obligatoriamente la privación. Algunos casos establecidos en el CIC indican la obligatoriedad de la pena, pero la dejan indeterminada, aunque se da la posibilidad de llegar hasta la privación. Se deben castigar con penas adecuadas a la gravedad del delito, sin excluir la de privación del oficio: la «sollicitatio ad turpia» (c. 1387); el abuso del oficio (c. 1389 § 1); la inobservancia de la obligación de residencia (c. 1396); el intento de homicidio y otros delitos contra la integridad física o la libertad (c. 1397).

La pena de privación nunca puede ser *latae sententiae* (c. 1336 § 2); por tanto, la privación que, según el c. 292, va aneja *ipso facto* a la pérdida del estado clerical no se puede considerar como verdadera privación, sino como remoción *ipso iure*, debida a un estado personal incompatible con el

¹⁷². F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, t. II, Romae 1943, p. 420, n. 361, A.

¹⁷³. Cfr decisión del STSA de 27.X.1984, en «Il Diritto Ecclesiastico» 1985/II, p. 260-270.

¹⁷⁴. Cfr B. OJETTI, *Commentarium in Codicem iuris canonici*, t. IV, Roma 1931, p. 137, nota 8; F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, cit., p. 421, n. 362.

desempeño de funciones públicas (*vide* comentario al c. 194). Lo dispuesto en el c. 1331 § 2,4º, tampoco es una pena de privación del oficio aneja a la de excomunión, sino una inhabilidad para obtener nuevos oficios (en este caso, el oficio poseído se pierde por remoción *ipso iure*, según el c. 194 § 1,2º, no por privación)¹⁷⁵.

Algún autor afirma que, cuando la ley penal indica simplemente la imposición de una «justa pena» indeterminada, la autoridad no podría aplicarla determinándola en la privación del oficio: sólo podría hacerlo si en la ley penal se especifica que puede imponerse una justa pena «sin excluir la privación del oficio»¹⁷⁶. Esta opinión encuentra un sólido apoyo en el c. 1349, según el cual, si la pena es indeterminada, el juez no debe imponer las penas más graves.

Según el c. 1315 § 3, sería posible establecer otras causas de privación por medio del derecho particular, pero el mismo canon advierte que no se debe hacer así, a no ser por gravísima necesidad. No habría tanto problema, sin embargo, para admitir que las penas indeterminadas en el derecho común fuesen determinadas en privaciones a través del derecho particular (que es cosa diversa a que el juez, al aplicar la ley penal indeterminada, no deba determinarla en este sentido, como ya hemos visto).

El c. 1319 § 1 establece que no pueden ser conminadas penas expiatorias perpetuas mediante precepto penal. Aunque en el CIC no se diga expresamente que la privación sea una pena perpetua, es imposible pensar en una privación temporal del oficio, pues la pérdida de la titularidad es perpetua por su misma naturaleza (no se puede confundir con la suspensión) y sólo se puede volver a adquirir mediante una nueva provisión del oficio. Por tanto, la privación del oficio no se puede conminar mediante precepto penal¹⁷⁷.

2. Procedimientos para infligir la privación

Los procedimientos para infligir la pena de privación del oficio siguen las normas previstas para la imposición de cualquier pena eclesiástica (cc. 1341-1353), pero con la especificidad de tratarse de una pena expiatoria perpetua.

En estos casos está claro que la autoridad eclesiástica no puede imponer a alguien la privación de un oficio que no esté bajo su potestad (c. 1338 § 1).

¹⁷⁵. De opinión contraria es L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico, commento giuridico-pastorale*, vol. I, Napoli 1988, p. 257, n. 1149.

¹⁷⁶. L. CHIAPPETTA, *Dizionario del Nuovo Codice di Diritto Canonico. Prontuario teorico-pratico*, Napoli 1986, voz *privazione*.

¹⁷⁷. Cfr V. DE PAOLIS-A. MONTAN, *Normae Generales*, en VV.AA., *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, vol. I, Roma 1988, p. 429.

Si consideramos la privación como pena perpetua, según el c. 1342 § 2 no podrá ser impuesta mediante decreto extrajudicial, como acertadamente han afirmado algunos¹⁷⁸. Esto no se dice de manera expresa en el CIC, y debido a esta falta de claridad tampoco faltan autores que sostienen lo contrario¹⁷⁹. Pero en el Código oriental se afirma explícitamente que «delictum puniri potest per decretum extra iudicium... dummodo non agatur de privatione officii» (c. 1402 § 2 CCEO). Admitiendo que la norma oriental sirve para reafirmar nuestra interpretación, queda, por tanto, la única vía del proceso judicial penal (cc. 1717-1731 CIC). En este sentido, el CCEO reserva estos casos al tribunal colegial de tres jueces (c. 1084 § 1,3° CCEO).

La apelación contra la sentencia que ha irrogado la privación del oficio tiene efecto suspensivo (c. 1353; cfr cc. 1728 § 1 y 1638): o sea, no se ejecuta la sentencia, y se mantiene la titularidad del oficio hasta que exista *res iudicata*. Pero la potestad ordinaria aneja a ese oficio queda también suspendida mientras tanto (c. 143 § 2).

La pena de «deposición», no recogida en el Código latino vigente, pero presente en el CIC 17 y en el actual Código oriental (c. 1433 § 2), no supone sólo la privación de los oficios, sino que se asimila a la pérdida del estado clerical (c. 292 CIC 83) añadiendo, además, la inhabilidad para obtener nuevos oficios. Sin embargo la privación no constituye impedimento para la futura obtención de un nuevo oficio¹⁸⁰. Ya en 1908 la pena de deposición era raramente infligida y, normalmente, en su lugar se imponía la simple dimisión junto con la suspensión perpetua¹⁸¹: quizás por esta razón ha desaparecido del CIC 83.

La retención del oficio después de haber sido privado de él se considera delito de usurpación (c. 1381 § 2).

P. Gefaell

¹⁷⁸. *Ibidem*.

¹⁷⁹. Cfr, p. ej., P.V. PINTO, *Comentario al c. 196*, en VV.AA., *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Diritto Canonico, Roma 1985, p. 105.

¹⁸⁰. B. OJETTI, *Commentarium...*, cit., p. 135, nota 1.

¹⁸¹. S. LUZIO, voz *Deposition*, en VV.AA. *The Catholic Encyclopedia*, vol. IV, Londres 1908.